

Señores

JUZGADO CUARTO (04º) CIVIL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, CAUCA.

i04ccpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
RADICACIÓN: 190013103004-**2024-00210-00**
DEMANDANTE: JESÚS ISAAC BETANCOURT ZUÑIGA Y OTROS
DEMANDADO: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. Y OTROS
LLAMADO EN LA EQUIDAD SEGUROS O.C.
GARANTÍA:

ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, actuando en mi condición de Representante Legal y abogado inscrito en el registro mercantil de **G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S.**, persona jurídica, legalmente constituida, identificada con Nit. 900.701.533-7, firma que actúa como apoderada general de la Compañía **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO**, identificada con Nit. 860.028.415-5 sociedad cooperativa de seguros, de conformidad con la Escritura Pública No. 2779 de la Notaría 10 de Bogotá D.C., del 02 de diciembre de 2021, inscrita bajo el registro No 2100580240 del libro XIII. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, comedidamente procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** declarativa de responsabilidad civil extracontractual promovida por JESÚS ISAAC BETANCOURT ZUÑIGA y OTROS en contra de FREDY NATIVEL MUÑOZ GÓMEZ y OTROS, así mismo procedo a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTIA** propuesto por la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE TIMBÍO – COOTRANSTIMBÍO para que en el momento en que se vaya a definir el litigio, se tenga en cuenta los hechos y precisiones que se hace a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho, en los siguientes términos:

CAPITULO I
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA

Sea lo primero advertir que, a partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, ha tenido a bien el legislador, incorporar dentro de los deberes del Juez, la figura o providencia denominada sentencia anticipada, por cumplimiento de los presupuestos procesales indicados de manera expresa dentro de la normativa aplicable.

Es necesario emitir una sentencia anticipada debido a que en el presente proceso se ha configurado la prescripción extraordinaria según los términos establecidos en el artículo 1081 del C. Co, toda vez que han transcurrido más de cinco (5) años desde que sucedieron los hechos que dieron base a la acción y desde la primera reclamación que se realizó a la compañía aseguradora. Por ese motivo y en atención a dicha disposición normativa, solicito a esta Judicatura proferir sentencia anticipada teniendo en cuenta la configuración de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.

Frente a la sentencia anticipada, el Código de Comercio ha establecido:

*“(…) **ARTÍCULO 278. CLASES DE PROVIDENCIAS.** Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.*

Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.

En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos: (...)

3. *Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, **la transacción**, la caducidad, la **prescripción extintiva** y la carencia de legitimación en la causa (...)*”

Por lo anterior, ruego al señor Juez tener en cuenta que en el presente proceso se ha configurado la prescripción extraordinaria del seguro emitido por mi prohiljada, dado que ha transcurrido más de cinco (5) años desde la fecha en la que la parte demandante presentó la solicitud indemnizatoria directa a mi mandante y la fecha de radicación de la demanda. Así las cosas, a fin de evidenciar de forma clara la prescripción de estas acciones es necesario tener en consideración los hitos temporales que a continuación se reseñan:

- Ocurrencia del accidente: 10 de marzo de 2017
- Presenta reclamación a La Equidad Seguros Generales S.A.: 12 de septiembre de 2018
- Presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial: 03 de octubre de 2019
- Fecha en la que se dio constancia de no acuerdo: 21 de enero de 2020
- Inicio de suspensión de términos según Decreto 564 del 2020: 16 de marzo de 2020
- Fin de suspensión de término según Acuerdo PCSJA20-11581 del 2020: 01 de julio de 2020
- Presentación de la demanda: 15 de octubre de 2024.

Ahora bien, de conformidad con estos hitos temporales solo resta realizar la sumatoria de los términos con el fin de constatar cómo transcurrieron más de cinco años desde la presentación de la solicitud indemnizatoria directa a La Equidad Seguros Generales S.A. a la fecha de la presentación de la demanda.

Se tiene que, desde el 12 de septiembre de 2018 hasta el 03 de octubre de 2019, fecha en la que inicio la suspensión de términos por la solicitud de conciliación extrajudicial, habían transcurrido 1 año y 21 días. Ahora bien, este término siguió contabilizándose desde el 4 de enero de 2020, por el transcurso de tres meses, por lo que desde esta fecha se retomó el computo del término prescriptivo, hasta que vuelve a suspenderse el término el 16 de marzo de 2020 de acuerdo al Decreto 564 de 2020, para este momento habían transcurrido el total del 1 año y 2 meses y 28 días.

En atención al Acuerdo PCSJA20-11581 los términos judiciales fueron reanudados a partir del 01 de julio de 2020, por lo que desde esta fecha se retomó el computo del término prescriptivo, por lo cual la parte demandante tenía hasta **28 de abril de 2024**. De tal suerte, que para el momento en que se presentó la demanda, ya había transcurrido más de 5 años desde que se perfecciono el término de prescripción extraordinario.

FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En el presenta caso se ha configurado el fenómeno jurídico de la prescripción ordinaria de la acción del contrato de seguro consagrada en el Artículo 1081 del Código de Comercio. En este evento se vincula a mi representada por medio de la acción de llamamiento en garantía con fundamento en contrato de seguro que amparaba al vehículo SHT-462. Sin embargo no puede perderse de vista que en este caso ha operado la prescripción extintiva de la acción que tiene la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE TIMBÍO frente a la compañía aseguradora, comoquiera que, el hecho que da base a la acción, es decir el accidente, ocurrió el 10 de marzo de 2017 y de acuerdo a la información que reposa en el expediente, el llamante en garantía conoció del hecho base de acción por citación a conciliación extrajudicial del 3 de octubre de 2019, es decir que desde ese momento comenzó a correr el término de prescripción de que trata el artículo 1081 del C.co por cuanto fue citado y compareció al proceso de conciliación promovido por los hoy demandantes, es decir que el llamante en garantía contaba con dos años para solicitar el amparo a mi representada y esto no ocurrió. El llamamiento en garantía se presentó el 28 de enero de 2025.

Es decir que, ante la inactividad del llamante en garantía se configuró el fenómeno prescriptivo que impide generar obligaciones a cargo de mi representada La Equidad Seguros Generales O.C. El Código de

Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros y en su artículo 1081 establece previsiones no sólo con relación al tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Dicho precepto establece lo siguiente:

“(...) ARTÍCULO 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes (...)”

Al señalar la disposición transcrita los parámetros para la determinación del momento a partir del cual empiezan a correr los términos de prescripción, distingue entre el momento en que el interesado, ha tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, en la prescripción ordinaria y, el momento del nacimiento del derecho, independientemente de cualquier circunstancia y aún cuando no se pueda establecer si el interesado tuvo o no conocimiento de tal hecho, en la extraordinaria, véase al respecto lo reglado en el artículo 1131 del C.co:

*“Artículo 1131. Ocurrencia del siniestro. En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. **Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.**”*

En síntesis, la prescripción ordinaria de que trata el Artículo 1081 del Código de Comercio es completamente aplicable al caso que nos ocupa, comoquiera que se acredita la presencia de los elementos subjetivos que se requiere para su declaratoria y que se diferencia de la prescripción extraordinaria que le corre a las demás clases de personas.

En otras palabras, el hoy llamante en garantía tuvo conocimiento de los hechos, pues de acuerdo con la prueba documental obrante en el plenario, indiscutiblemente conocieron del accidente y la consecuente muerte de su familiar el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D). Igualmente, tuvieron conocimiento de su facultad para accionar desde el momento en el que se les convocó a audiencia de conciliación extrajudicial, momento en el cual, sin lugar a dubitaciones, conocían a la perfección la existencia de la reclamación en su contra sin embargo no advirtieron a la aseguradora ni la convocaron para su cobertura dentro del término de dos años, por cuanto este llamamiento en garantía se presentó al despacho solo hasta el 28 de enero de 2025.

Es así como a partir de la fecha de 21 de enero de 2020 empezó a correr el fenómeno de prescripción ordinaria y que se configuró teniendo en cuenta los siguientes hitos temporales:

- *El accidente como hecho que da base a la acción ocurrió el 10 de marzo de 2017.*
- *Presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial por parte de los demandantes fue el 03 de octubre de 2019.*
- *Fecha en la que se dio constancia de no acuerdo, el 21 de enero de 2020*
- *Fecha de reanudación de términos: 3 de enero de 2020 (tres meses proceso de conciliación)*
- *Inicio de suspensión de términos según Decreto 564 del 2020: 16 de marzo de 2020. Término fue de 3 meses y 14 días.*
- *El llamante en garantía contaba hasta el 30 de marzo de 2022, para iniciar la acción en contra de mi representada La Equidad Seguros Generales O.C*
- *El presente llamamiento en garantía solo se efectuó hasta el 28 de enero de 2025, es decir sobrepasa sin lugar a dudas el termino vial de dos años, configurándose así el término prescriptivo.*

Considerando los hitos temporales antes enunciados, es claro que la prescripción ordinaria para ejercer la acción en contra de mi representada feneció con creces, sin que se verificara que el llamante en garantía hubiera interrumpido el término prescriptivo, pues no inició ningún tipo de acción en contra de La Equidad Seguros Generales O.C y por ende ante la inactividad de la parte demandante en los términos que consagra la ley, es claro que en este caso no puede existir obligación indemnizatoria a cargo de la Compañía aseguradora.

En conclusión, probado como se encuentra, desde el 3 de octubre de 2019 (fecha en el llamante en garantía conoció frente a la constancia de no acuerdo de proceso de conciliación extrajudicial) hasta la fecha de presentación del llamamiento en garantía, transcurrieron más de 2 años superando con creces el término de prescripción ordinaria. De tal suerte que como la parte demandante no interpuso acción alguna dentro de los términos del artículo 1081 del C.Co, la prescripción operó y por ende no podrá surgir obligación alguna a cargo de La Equidad Seguros Generales O.C.

CAPITULO II.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

I. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

FRENTE AL HECHO “PRIMERO”: De la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias afirmaciones, frente a las que me pronunciaré de la siguiente manera:

1. A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser acreditado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.
2. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso resaltar lo señalado el Informe de Accidente de Tránsito, se estableció como hipótesis configurativa del accidente la No. 409 que corresponde a “Cruzar sin observar” en cabeza del Santiago Betancourt Muñoz en calidad de peatón.

13. OBSERVACIONES	hipotesis del peaton 409 concordancia ley 769 del 2002
capitulo II articulo 59 Es de anotar que los afectados no requirieron	
procedimiento a la escalar 10 sollicitaron por escrito. por lo tanto no hay vehiculo	
inmovilizado	

Por lo anterior, solicito al despacho tener en cuenta tanto la hipótesis de accidente registrada en el IPAT, por medio del cual se comprueba la responsabilidad del señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D), en la ocurrencia del accidente tránsito, eximiendo por otra parte de toda responsabilidad al señor Fredy Nativel Muñoz Gómez, conductor del vehículo SHT-462.

FRENTE AL HECHO “SEGUNDO”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones este hecho, comoquiera que corresponde a aspectos propios de la esfera íntima y personal de los actores. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P. Es importante resaltar que mi representada desconoce las circunstancias fácticas que acaecieron desde el 10 de marzo de 2017 y hasta el 19 de abril de 2017, periodo en el cual según la parte demandante el señor Betancourt permaneció en el centro médico Clínica Dumian.

FRENTE AL HECHO “TERCERO”: De la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias afirmaciones, frente a las que me pronunciaré de la siguiente manera:

1. De acuerdo con el material probatorio que se allega en el expediente, es cierto que, para el 10 de marzo de 2017, el vehículo SHT-462 era de propiedad del señor Rubio Pantoja Torres y se encontraba adscrito a la empresa Cooperativa de Transportadores de Timbio Cootranstambio.
2. A mi procurada no le consta de forma alguna que para el momento de ocurrencia del presunto accidente de tránsito el vehículo de placa SHT-462 hubiese sido conducido por el señor Fredy Nativel Muñoz Gómez. No obstante, de acuerdo al Informe de Accidente de Tránsito (IPAT), se

confirma que para el momento de los hechos el señor Muñoz Gómez se encontraba conduciendo el vehículo en mención.

3. Si bien es cierto que para el momento de ocurrencia del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 10 de marzo de 2017, el vehículo de placa SHT-462 contaba con póliza que amparaba, entre otros, la responsabilidad civil extracontractual derivada de la conducción de dicho automotor. No obstante, es necesario exponer que este contrato de seguro no ofrece cobertura para los hechos objeto de litigio, comoquiera que:

- 3.1. No se realizó el riesgo asegurado.
- 3.2. Se configuro una exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro, pues se llegó a un arreglo transaccional o conciliación sin el consentimiento previo de mi prohijada.
- 3.3. En este caso operó la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro en cabeza de los demandantes, pues en vista de que la parte demandante presento reclamación a mi prohijada el 12 de septiembre de 2018, este hecho confirma que se configuró la prescripción de la acción de seguro extraordinaria, pues pasaron más de cinco años desde esta solicitud hasta la fecha en que se presentó la demanda, que fue el 15 de octubre de 2024.

FRENTE AL HECHO “CUARTO”: No es cierto que los demandados hayan violentado múltiples normas de tránsito que conllevaron al penoso fallecimiento del señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D), pues lo expuesto en el presente hecho es una mera exposición subjetiva la cual no cuenta con ningún respaldo probatorio para determinar su veracidad. Por el contrario, de acuerdo a los documentos obrantes en el expediente se observa que el Informe de Accidente de Tránsito, establece que el hecho acaeció como consecuencia de la conducta asaz e imprudente desplegada por el peatón quién *crucza sin observar*, y es la conducta que configura la responsabilidad de los hechos aquí demandados en cabeza exclusivamente del señor Betancourt (Q.E.P.D).

FRENTE AL HECHO “QUINTO”: No es cierto que entre La Equidad Seguros de Vida O.C. y la Cooperativa de Transportadores de Timbio Cootranstímio se haya celebrado un contrato de seguro, ya que La Equidad Seguros de Vida O.C. no expide pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual. Por el contrario, dicho seguro fue contratado con La Equidad Seguros Generales O.C., una persona jurídica completamente distinta, identificada con un número de NIT diferente.

Ahora bien, si bien es cierto que para el momento de ocurrencia del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 10 de marzo de 2017 se encontraba vigente la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, certificado AA035497. Lo cierto es que la existencia de un contrato de seguro no implica *prima facie* el surgimiento de obligación indemnizatoria en cabeza de mi procurada, toda vez que se debe cumplir en primer lugar, con la acreditación del hecho dañino en cabeza del asegurado. En segundo lugar, que se encuentre probada la estructuración de la Responsabilidad Civil durante la vigencia de la póliza y, en tercer lugar, que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro como las que operan al interior del presente trámite.

Al respecto, es preciso señalar que en este evento se configuró la prescripción consagrada en el Artículo 1081 del Código de Comercio, toda vez que como mi mandante ha sido demandada directa en este proceso de responsabilidad civil extracontractual, en virtud de la existencia del contrato de seguro, se encuentra que ha operado la prescripción extintiva de la acción frente a la compañía aseguradora por la vía extraordinaria, comoquiera que, el hecho que da base a la acción, el accidente, ocurrió el 10 de marzo de 2017, momento desde el cual comenzó a contarse el término prescriptivo. Este término se interrumpió el 12 de septiembre de 2018 en razón a reclamación directa que la parte demandante presentó a mi representada, debidamente objetada el 10 de octubre de 2018:

ABOGADOS ASOCIADOS
HERNANDO BERMUDEZ SALAZAR
Calle 1N # 8 - 77 / Modelo - Popayán. Tel 3137587473 Popayán

Popayán 31 de Agosto de 2018.

SEÑORES.

SEGUROS LA EQUIDAD.
E. S. D.

Referencia: **SOLICITUD DE INDEMNIZACION - SINIESTRO.**
Tomador: **PANTOJA TORRES RUBIO. CC 87.027.345**
Vehículo: **Placa SHT 462.**
Reclamante: **OSWALDO BETANCOURTH ZUÑIGA y OTROS.**
Accidente de tránsito No AT1306 8589641 4 (Responsabilidad Civil Extracontractual).

Asunto: Derecho de petición preestablecido en el artículo 23 Constitución Política, regulado por la Ley 1755 del 30 junio de 2015.

HERNANDO BERMUDEZ SALAZAR, identificado con la C. C. No 4.729.611 de Páez (Cauca), abogado en ejercicio con T. P. No 179.453 del C.S.J, actuando en calidad de apoderado judicial de los señores: **OSWALDO BETANCOURTH ZUÑIGA, JUAN MARIA BETANCOURT ZUÑIGA, MARGARITA BETANCOURT ZUÑIGA Y OTROS**; conforme al poder cuya original acompaño a este escrito, de manera respetuosa procedemos a interponer **DERECHO DE PETICION** ante su digno despacho o a quien haga sus veces conforme a los siguientes términos:

Fecha y hora: 2018-09-12 04:39:55 PM
Asunto: RECLAMACION SINIESTRO 10074829
No folios: 67
Agencia destino: POPAYAN
Area destino: AREA AGENCIA POPAYAN
Siniestro: 10074829
Producto: 0116
Remitente: DAVID MOSQUERA
Destinatario: DAVID MOSQUERA

LA EQUIDAD SEGUROS O.C.



201809120130005

Destino Interno

Sin embargo, el término prescriptivo se reanudó a partir de esa fecha y continuó su curso, habiéndose presentado la demanda solo hasta el 15 de octubre de 2024, es decir, **6 años, 1 mes y 7 días después** del hecho generador, cuando la prescripción más extensa es de 5 años, al respecto véase la respectiva acta de reparto:

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Fecha: 15/oct./2024

CORPORACION		GRUPO	CGP - PROCESOS VERBALES (MAYOR CUANTIA)	Página
Jueces Constitucionales del Circuito		CD. DESP	SECUENCIA:	1
REPARTIDO AL DESPACHO		004	52236	FECHA DE REPARTO
				15/oct./2024
JUZGADO CUARTO CIVIL CTO ORALIDAD				
IDENTIFICACION	NOMBRE	APELLIDO		PARTE
10524154	JESUS ISAAC	BETANCOURT ZUÑIGA		01
4729611	HERNANDO BERMUDEZ SALAZAR	BERMUDEZ		03

C09001-OJ01X60

jamezqun EMPLEADO

Por lo tanto, la inactividad de los accionantes generó el fenómeno prescriptivo, lo que impide establecer obligaciones en cabeza de mi representada, La Equidad Seguros Generales de Colombia O.C. Además, debe destacarse que, conforme al artículo 94 del CGP, la interrupción de la prescripción solo puede darse una vez, lo cual ratifica que la acción se encuentra prescrita.

En igual sentido, de conformidad con la documentación adosada al plenario es claro cómo entre el señor SANTIAGO BETANCOURT MUÑOZ y el señor FREDY MUÑOZ GÓMEZ, llegaron a un acuerdo conciliatorio mediante el cual se transigieron todos los daños y perjuicios, de tipo patrimonial y extrapatrimonial derivados de los hechos presuntamente acaecidos el 10 de marzo de 2017, como se evidencia en la siguiente imagen tomada del aludido contrato de transacción:

CONSTANCIA DE INDEMNIZACION Y PAZ Y SALVA

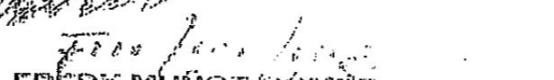
Entre los suscritos a saber, **SANTIAGO BETANCOUR MUÑOZ** y **FREDY MUÑOZ GÓMEZ**, mayores de edad, identificados como aparecen al pie de nuestras correspondientes firmas, por medio del presente escrito llegamos a un acuerdo amistoso por las lesiones personales ocasionados en accidente de tránsito ocurrido el día 10 de marzo de 2017, en panamericana frente al colegio INEM, por el vehículo tipo taxi de las siguientes características:

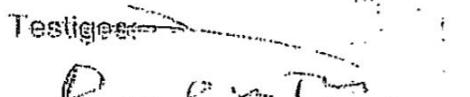
Transcripción relevante: *Entre los suscritos a saber, SANTIAGO BETANCOUR MUÑOZ y FREDY MUÑOZ GÓMEZ, mayores de edad, identificados como aparecen al pie de nuestras correspondientes firmas, por medio del presente escrito llegamos a un acuerdo amistoso por las lesiones personales ocasionadas en accidente de tránsito ocurrido el día 10 de marzo de 2017, en panamericana frente al colegio INEM (...)*

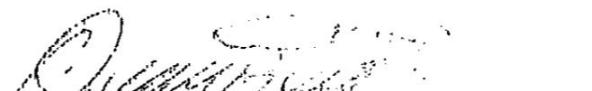
TERCERA: Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 16, 2403 y concordantes del código Civil Colombiano, el señor **SANTIAGO BETANCOUR MUÑOZ**, desiste de todas las acciones civiles y/o penales, para perseguir el pago de algún perjuicio, toda vez que con el acuerdo llegado entre las partes se siente resarcido en los daños y perjuicios que se le ocasionaron su humanidad.

Para constancia se suscribe por las partes en dos hojas: una para cada una ante dos testigos hábiles, en la ciudad de Popayán a los 17 días del mes de marzo de 2017.


SANTIAGO BETANCOUR MUÑOZ
C.C 1.511.071 de Santander de Qui.


FREDY MUÑOZ GÓMEZ
C. C. No. 4.627.740 de Bolívar Cauca

Testigos:

RUBIO PANTOJA TORRES
C. C. 87.027.345 Taminango N


OSWALDO BETANCOURT ZÚÑIGA
C. C. 10.535.749 de Popayán

Transcripción relevante: *TERCERA: Que de acuerdo a lo establecido en los artículo 16, 2403 y concordantes del código Civil Colombiano, el señor Santiago Betancourt Muñoz, desiste de todas las acciones civiles y/o penales para perseguir el pago de algún perjuicio, toda vez que con el acuerdo llegado entre las partes se siente recesarcido en los daños y perjuicios que se le ocasionaron su humanidad.*

Se observan las firmas de los señores Santiago Betancourt Muñoz, Fredy Muñoz Gómez, Rubio Pantoja Torres y Oswaldo Betancourt Zúñiga. De tal suerte, ante el acuerdo realizado por parte del conductor y el propietario del vehículo asegurado sin consentimiento y/o aquiescencia previa y por escrito de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., es diáfana la configuración de otra causal de exclusión del contrato de seguro, veamos:

2.20. CUANDO EL TOMADOR, ASEGURADO O CONDUCTOR SE DECLARE RESPONSABLE O EFECTÚE ARREGLOS TRANSACCIONES O CONCILIACIONES SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO PREVIO DE LA EQUIDAD.

Luego, al no estar acreditado que el hecho dañino sea imputable al conductor del vehículo asegurado, sumado a que se perfeccionó la prescripción de las acciones de seguro y que en todo caso se haya plenamente acreditada una causal de exclusión, es claro como la Póliza de Seguro Servicio Público No. AA003687, certificado AA035497, no podrá afectarse.

FRENTE AL HECHO “SEXTO”: De la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias afirmaciones, frente a las que me pronunciaré de la siguiente manera:

No es cierto que el señor Fredy Muñoz Gómez haya violentado múltiples normas de tránsito que conllevaron al penoso fallecimiento del señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D), pues lo expuesto en el presente hecho es una mera exposición subjetiva la cual no cuenta con ningún respaldo probatorio para determinar su veracidad. Por el contrario, de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente se observa que el Informe de Accidente de Tránsito, establece que el hecho acaeció como consecuencia de la conducta imprudente desplegada por el peatón quién *crucza sin observar*, y es la conducta que configura los hechos aquí demandados.

No es cierto que, sobre La Equidad Seguros, repose alguna responsabilidad civil extracontractual por los hechos acaecidos el 10 de marzo de 2017, comoquiera que la misma no tuvo participación, injerencia y no presenció la ocurrencia del reprochado accidente. Así mismo, no puede perderse de vista que la vinculación de mi procurada se efectuó en atención a un contrato de seguro, el cual requiere del cumplimiento de una serie de especificidades para su afectación, sin pasar por alto, que el Despacho debe estudiar la cobertura y exclusiones pactadas en el contrato aseguratorio emitido por mi representada que impida de alguna manera su afectación.

Así, es necesario exponer que este contrato de seguro no ofrece cobertura para los hechos objeto de litigio, comoquiera que, (i) Se configuro una exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro, pues se llegó a un arreglo transaccional o conciliación sin el consentimiento previo de mi prohijada, exclusión expresamente establecida en las condiciones de la póliza; y (ii) En este caso operó la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro en cabeza de los demandantes, pues en vista de que la parte demandante presento reclamación a mi prohijada el 12 de septiembre de 2018, este hecho confirma que se configuró la prescripción de la acción de seguro, pues pasaron más de cinco años desde esta solicitud hasta la fecha en que se presentó la demanda, esto es, el 15 de octubre de 2024.

FRENTE AL HECHO “SÉPTIMO”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones este hecho, comoquiera que corresponde a aspectos propios de la esfera íntima y personal de los actores. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

FRENTE AL HECHO “OCTAVO”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones este hecho, comoquiera que corresponde a aspectos propios de la esfera íntima y personal de los actores. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

Es importante señalar que en el plenario no reposa prueba si quiera sumaria que permita acreditar o dilucidar que el señor SANTIAGO BETANCOURT MUÑOZ estuviere al cuidado de toda su familia, Maxime cuando no hay soportes frente al lugar de residencia del señor BETANCOURT con respecto a sus sobrinos, los hoy demandantes.

FRENTE AL HECHO “NOVENO”: A mi procurada no le consta de manera directa ninguna de las manifestaciones este hecho, comoquiera que corresponde a aspectos propios de la esfera íntima y personal de los actores. En consecuencia, corresponde al extremo actor acreditar su dicho en los términos del artículo 167 del C.G.P.

Es importante resaltar que el hecho de que los hermanos del señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D), es decir los señores GERARDO BETANCOURT y SALVADO BETANCOURT, tuvieren hijos, de ninguna manera acredita que el causante durante toda su vida tuviere como estado civil fuera soltero, sin unión marital de hecho vigente, sin sociedad conyugal matrimonial, y mucho menos acredita que estuviere al cuidado de sus sobrinos, por cuanto no media prueba si quiera sumaria de ello.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

FRENTE A LA PRETENSIÓN “PRIMERA”: Sin perjuicio de que la pretensión no está enervada en contra de mi representada, **ME OPONGO** a que se declare civilmente responsable al señor Fredy Navitel Muñoz Gómez., toda vez que: (i) En el plenario no obran pruebas que acrediten que el hecho dañoso fue ejecutado por el demandado en mención (y, por consiguiente, no se ha demostrado la ocurrencia del riesgo asegurado en la póliza expedida por mi mandante). (ii) No se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta y el daño deprecado por la accionante. (iii) Por el contrario, de acuerdo con el IPAT, se acredita la existencia del hecho exclusivo de la víctima en la producción del evento reprochado por el extremo accionante, puesto que de acuerdo al IPAT allegado, se evidencia que las causas del accidente del 10 de marzo del 2017, devienen de la conducta asaz e imprudente desplegada por el señor Santiago Betancourt Muñoz quien “*Cruzo sin observar*”, configurándose el eximente de responsabilidad por “hecho exclusivo de la víctima”. Por lo anterior, no tiene vocación de prosperar la pretensión declarativa del extremo actor, y por lo tanto deberá negarse.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “SEGUNDA”: Sin perjuicio de que la pretensión no está enervada en contra de mi representada, **ME OPONGO** a que se declare responsable al señor Rubio Pantoja Torres, Cooperativa de Transportadores de Timbio Cootranstímulo, toda vez que: (i) En el plenario no obran pruebas que acrediten que el hecho dañoso tuvo lugar por la conducta de la demandada en mención (y, por consiguiente, no se ha demostrado la ocurrencia del riesgo asegurado en la póliza expedida por mi mandante). (ii) No se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta y el daño deprecado por la accionante. (iii) Por el contrario, las documentales adosadas, acreditan el rompimiento de dicho nexo de causalidad en virtud de la configuración del hecho exclusivo de la víctima en la producción del evento reprochado por el extremo accionante, en tanto que, Informe de Accidente de Tránsito, acredita que los hechos ocurrieron por la negligencia e impericia del demandante, pues en esta se establece que el accidente se configuró porque es el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D) cruzó la vía sin observar.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “TERCERA”: **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión subsidiaria de la anterior que, por las razones ya expuestas, no tiene vocación de prosperidad; concretamente porque de conformidad con el IPAT, se acredita la existencia hecho exclusivo de la víctima en la producción del evento reprochado por el extremo accionante, puesto que de acuerdo al IPAT allegado, se evidencia que las causas del accidente del 10 de marzo del 2017, devienen de la conducta asaz e imprudente desplegada por porque es el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D) cruzó la vía sin observar. Adicionalmente, me opongo a cualquier tipo de condena directa en contra de mi procurada, comoquiera que la misma no tuvo participación, injerencia y no presenció la ocurrencia del reprochado accidente.

Así mismo, no puede perderse de vista que la vinculación de mi procurada se efectuó en atención a un contrato de seguro, el cual requiere del cumplimiento de una serie de especificidades para su afectación, sin pasar por alto, que el Despacho debe descartar que no se cumplan ninguna de las exclusiones pactadas en el contrato aseguratorio emitido por mi representada que impida de alguna manera su afectación.

Así, es necesario exponer que este contrato de seguro **no podrá afectarse para los hechos objeto de litigio**, comoquiera que, **(i)** Se configuro una exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro, pues se llegó a un arreglo transaccional o conciliación sin el consentimiento previo de mi prohijada; y **(ii)** En este caso operó la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro en cabeza de los demandantes, pues en vista de que la parte demandante presentó reclamación a mi prohijada el 12 de septiembre de 2018, este fue el hito temporal inicial a partir del cual empezó a contarle el término de cinco años de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio para presentar su acción, no obstante, la demanda se presentó hasta el 15 de octubre de 2024 cuando ya se había configurado la prescripción.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “CUATRA ”: ME OPONGO a la presente pretensión debido a que es consecencial a la anterior pretensión y comoquiera que esta no tiene vocación de prosperidad por resultar improcedente, esta también debe ser desestimada. Sin embargo, procederé a pronunciarme rente a cada petición de la siguiente manera:

- **Frente a los “PERJUICIOS MORALES”:** **ME OPONGO** al reconocimiento y pago de 100 SMLMV para cada uno, a favor de los señores Jesús Isaac Betancourt Zuñiga, Juan Maria Betancourt Zuñiga, Oswaldo Betancourt Zuñiga, Gloria Nereida Betancourt Escobar, Neisa Ruth Betancourt Escobar, Alirio Betancourt Escobar, Ana Julia Betancourt Escobar, María Elvira Betancourt Escobar, Fredy Gerardo Betancourt Escobar, por concepto de daño moral, primero, porque no se estructuró responsabilidad civil en cabeza de la pasiva y por lo mismo, no existe obligación indemnizatoria a su cargo; y segundo, porque en todo caso, no se acreditaron los presupuestos necesarios para acceder al mismo. Adicionalmente, la estimación realizada por la parte demandante es completamente exorbitante de cara a los baremos establecidos por la Corte Suprema de Justicia, máxime si se tiene en cuenta que la parte actora son parientes del causante en tercer grado de consanguinidad.
- **Frente a los “PERJUICIOS MATERIALES”:** En este punto también resulta esencial señalar al despacho que la parte actora ha incurrido en un error al clasificar el tipo de perjuicio por el cual se solicita el pago de \$1.480.000 como lucro cesante, siendo este un perjuicio determinado dentro de la categoría de daño emergente, puesto que esta figura jurídica implica aquellos perjuicios materiales que surgen por la pérdida de un beneficio económico que se esperaba obtener, pero que debido al daño ya no será posible recibir. Así, en consideración a esto y sin que implique reconocimiento por parte de mi prohijada, debe tener en cuenta su Despacho que no podrá reconocer el perjuicio tal como fue pedido, pero tampoco le es dable modificarlo en virtud del principio de congruencia que rige las actuaciones judiciales.

Sin embargo, incluso bajo esta clasificación, ME OPONGO, pues se evidencia una ausencia probatoria, puesto que no obra dentro del plenario elementos demostrativos que permitan determinar que se han realizado dichas erogaciones de dinero, o cómo y a quién se le ha pago por las exequias establecidas.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “QUINTA”: **ME OPONGO** a que se condene en costas procesales a la parte pasiva del litigio, habida cuenta de la inexistencia de responsabilidad de los demandados y consecuentemente, de su obligación indemnizatoria. De modo que, teniendo que despacharse desfavorablemente las pretensiones del extremo actor, tampoco puede haber lugar a una condena por este concepto. Por lo expuesto la pretensión deberá ser negada.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “SEXTA”: No se hace necesario realizar pronunciamiento alguno respecto de esta pretensión.

III. OPOSICIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del Art. 206 del CGP, y con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a **OBJETAR** el Juramento Estimatorio de la Demanda. Lo mencionado, toda vez que se evidencia la ausencia de una liquidación razonada sobre el quantum del perjuicio reclamado, máxime

cuando la tipología de perjuicio material debe acreditarse a partir de elementos que demuestren fidedignamente que existió un detrimento o merma en el patrimonio del reclamante, situación que no se prueba exclusivamente con aseveraciones del demandante.

Es preciso señalar que, en materia de indemnización de perjuicios, opera el principio de que el daño y su cuantía deben estar plenamente probados para proceder a su reconocimiento, toda vez que al juzgador le está relegada la posibilidad de presumir como cierto un perjuicio y más aún la magnitud del mismo. En efecto, con miras a la obtención de una indemnización, no basta alegar el supuesto detrimento, por cuanto el mismo no es susceptible de presunción, sino que es obligatorio acreditar debidamente su cuantificación. De acuerdo con el Art. 206 del CGP, la parte demandante deberá indicar en el texto en el cual se hace el juramento estimatorio lo siguiente: 1. Que se afirma bajo la gravedad del juramento; 2. Que se trata de juramento estimatorio; 3. El valor de cada uno de los conceptos, rubros o partidas que componen la indemnización, frutos, mejoras o compensación, en este tipo de escenarios, incluir los conceptos por perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante); 4. El valor total y; 5. Las razones que se tuvo en cuenta para cada uno de los valores asignados, exponiéndolos con precisión, claridad y con fundamento en pruebas.

En el caso que nos convoca, y de acuerdo con lo previsto en la norma en mención, objeto el juramento estimatorio realizado por el apoderado judicial de la parte demandante, por los siguientes motivos:

Las pretensiones de la demanda se sustentan todas en la supuesta responsabilidad del conductor del vehículo de placas SHT-462 en la ocurrencia del accidente de tránsito ocurrido el 10 de marzo de 2017, sin embargo y como con amplitud se ha demostrado en la contestación de esta demanda, no existe prueba alguna que permita endilgar dicha responsabilidad. En ese sentido, no puede prosperar la estimación de perjuicios, pero al margen de ello en ninguna manera la estimación señalada cumple con suficiencia el criterio de razonabilidad pues es meramente especulativa como se precisa a continuación:

RESPECTO AL LUCRO CESANTE: Resulta esencial señalar al despacho que la parte actora ha incurrido en un error al clasificar el tipo de perjuicio por el cual se solicita el pago de \$1.480.000 como lucro cesante, puesto que esta figura jurídica implica aquellos perjuicios materiales que surgen por la pérdida de un beneficio económico que se esperaba obtener, pero que debido al daño ya no será posible recibir. Así, en consideración a esto y sin que implique reconocimiento por parte de mi prohijada, debe tener en cuenta su Despacho que no podrá reconocer el perjuicio tal como fue pedido, pero tampoco le es dable modificarlo en virtud del principio de congruencia que rige las actuaciones judiciales.

Sin embargo, incluso bajo esta clasificación, objeto su cuantía, pues se evidencia una ausencia probatoria, puesto que no obra dentro del plenario elementos demostrativos que permitan determinar que se han realizado dichas erogaciones de dinero, o cómo y a quién se le ha pago por las exequias establecidas.

Corolario de lo expuesto, el juramento estimatorio no puede surtir los efectos previstos en el artículo 206 del C.G.P. y, por tanto, no puede servir de prueba sobre el monto de los perjuicios que en el escrito demandatorio se pretenden. En estos términos me opongo enfáticamente a la estimación de perjuicios realizada por la parte activa de la litis.

IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO

A. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA RESPONSABILIDAD DEPRECADA POR LOS DEMANDANTES.

1. HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA, COMO CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DE QUIENES INTEGRAN LA PARTE PASIVA DE LA ACCIÓN.

En el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna a los demandados por los hechos acaecidos el 10 de marzo de 2017, en el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo de placas SHT-462. Lo anterior, comoquiera que operó la causal eximente de la responsabilidad relativa al

Hecho Exclusivo de la Víctima. Bajo esta premisa, a través de esta excepción se le mostrará al Despacho cómo la ocurrencia del accidente de tránsito es atribuible exclusivamente a la irresponsabilidad, imprudencia, negligencia y falta de acatamiento de las normas de tránsito por parte de la víctima directa. Ello por cuanto de acuerdo con el informe Policial de Accidente de Tránsito, consagra como hipótesis del accidente la 409. “PEATÓN CRUZA SIN OBSERVAR” para el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D), quien se desplazaba como peatón. En ese orden de ideas, la configuración y aplicación de esta causal exonerativa de responsabilidad tiene por efecto la imposibilidad de imputación del daño al extremo pasivo de la Litis.

Recordemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, la responsabilidad civil por actividades peligrosas admite la intervención exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad, toda vez que, no se puede desconocer que la conducta bien sea positiva o negativa de la víctima pudo tener una incidencia relevante en el examen de responsabilidad civil, ya que su comportamiento podría corresponder a una condición o incluso a la producción misma del daño. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha indicado con claridad que cuando la conducta imprudente de la víctima fue suficiente para causar el daño, debe liberarse de toda responsabilidad a los demandados, así:

“(…) La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.¹

(…) Precitado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pacífica en señalar que para el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinación de la obligación reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producción del daño y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que él ya haya provocado esa reacción en la víctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuación independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella.

*(…) En todo caso, así se utilice la expresión “culpa de la víctima” para designar el fenómeno en cuestión, en el análisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto técnico de culpa, entendida como presupuesto de la responsabilidad civil en la que el factor de imputación es de carácter subjetivo, en la medida en que dicho elemento implica la infracción de deberes de prudencia y diligencia asumidos en una relación de alteridad, esto es, para con otra u otras personas, lo que no se presenta cuando lo que ocurre es que el sujeto damnificado ha obrado en contra de su propio interés. Esta reflexión ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que **la “culpa de la víctima” corresponda – más precisamente – a un conjunto heterogéneo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no solo comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producción del daño**, con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el artículo 2357 del código Civil, aún cuando allí se aluda a “imprudencia” de la víctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son “capaces de cometer delito o culpa” o a comportamientos de los que la propia víctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuación (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre un daño).*

¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC7534-2015. Sentencia del 16 de junio de 2015.

Así lo consideró esta Corporación hace varios lustros cuando precisó que “en la estimación que el juez ha de hacer del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la acción civil de reparación, no hay para que tener en cuenta, a juicio de la Corte, el fenómeno de la imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de la víctima, **porque no se trata entonces del hecho-fuente de la responsabilidad extracontractual que exigiría la aplicación de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado como un elemento extraño a la actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado solamente a producir una consecuencia jurídica patrimonial en relación con otra persona** (...)”² (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Por todo lo anterior, la doctrina y jurisprudencia contemporánea³ prefieren denominar el fenómeno en cuestión como el “hecho” de la víctima, como causa única en la producción del daño cuya reparación se demanda. Continuando con el estudio jurisprudencial del hecho de la víctima como causal eximente de la responsabilidad, debemos hacer referencia a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que en fallo del 17 de noviembre de 2020 se refirió a los elementos que estructuran la responsabilidad así:

“(…) El régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, **la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor** (...)”⁴ (Subrayado y negrilla fuera del texto)

En el mismo pronunciamiento del 17 de noviembre de 2020, la corte indicó lo siguiente:

“(…) La visión del asunto contenida en dicha providencia se traduce en una verdad inobjetable: si no existe nexo causal entre el daño y el actuar del demandado, resulta indudable que en ese evento no pudo mediar culpa o dolo de su parte, dado que, finalmente, **a nadie puede atribuirse falta alguna por un hecho que no tiene ninguna relación con su conducta** (...)”⁵ (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Teniendo en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales expuestos, es dable concluir que de mediar un “hecho exclusivo de la víctima”, el presunto responsable y generador del daño será exonerado de cualquier tipo de responsabilidad. Para el caso que nos ocupa, es totalmente claro que la conducta del señor Santiago Betancourt Muñoz, fue el único factor relevante y adecuado que incidió en las lesiones por él sufridas. Por tal razón, resulta jurídicamente inviable imputarle responsabilidad a los Demandados. Por tanto, deberá el honorable juez proceder a negar las pretensiones de la demanda reformada.

Así las cosas, el Despacho debe advertir que el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. 190016000601201700302, le atribuye las causas del accidente exclusivamente al peatón, señor Santiago Betancourt Muñoz, con la codificación No. 409 correspondiente a “PEATÓN CRUZA SIN OBSERVAR”, atribuible cuando el peatón no se detiene a observar la vía antes de atravesarla.

² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de marzo de 1941.

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2010. Expediente 1989-00042 M.P. Arturo Solarte Rodríguez

⁴ Corte Suprema de Justicia. SC4420-2020. Expediente 2011-00093. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona

⁵ Ibidem

13. OBSERVACIONES	HIPOTESIS DEL PEATON 409 CONCORDANCIA LEY 769 DEL 2002
CAPITULO II ARTICULO 59	FS DE ANOTAR QUE LOS DEMANDADOS NO REQUERON
PROCEDIMIENTO A LA ESCALA O SOLICITACION POR ESCRITO, POR LO TANTO NO HAY VEHICULO	
INMOVILIZADA	

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO
HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO:
Hipótesis del peatón 409.

Lo anterior, demuestra contundentemente que desde la prueba base de este proceso (Informe Policial de Accidente de Tránsito) queda totalmente claro que las causas que ocasionaron el accidente en el que resultó lesionado el demandante, en ningún caso pueden ser imputables al conductor del vehículo SHT-462, ni mucho menos al propietario de dicho vehículo. Por cuanto es evidente que las circunstancias que rodearon el hecho se encontraban en la esfera del dominio de la víctima y no de los demandados.

Dicho esto, es importante anotar que el hecho de la víctima hace parte de las causas extrañas mediante las cuales se rompe el vínculo de causalidad entre los perjuicios sufridos por demandante y la conducta del que es señalado de ser responsable. De modo tal, que la conducta del señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D) reviste de la calidad y envergadura requerida para excusar la responsabilidad del conductor del vehículo SHT-462 y los demás demandados.

Es importante resaltar que el demandante no allega prueba alguna a este despacho que respalde las afirmaciones relacionadas con el supuesto factor determinante de la causa del accidente. No se ha aportado evidencia que demuestre que el vehículo en cuestión se encontraba en exceso de velocidad o que no respetó las señales de tránsito sobre la vía. Por el contrario, a partir del informe de accidente de tránsito se acredita totalmente que la única causa del daño es atribuida al peatón. Lo que significa, que efectivamente nos encontramos ante la configuración de la causal eximente de responsabilidad “hecho exclusivo de la víctima” que libera de toda responsabilidad a la parte pasiva de esta litis.

De igual manera, se verifica que el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D.), quien para el momento de los hechos contaba con 92 años de edad, incumplió lo dispuesto en el artículo 59 del Código Nacional de Tránsito, el cual establece que los ancianos deben transitar por las vías con el acompañamiento de una persona mayor de dieciséis años. Dicha norma señala expresamente:

*“ARTÍCULO 59. LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES. Los peatones que se enuncian a continuación **deberán ser acompañados, al cruzar las vías, por personas mayores de dieciséis años:***

(...)

Los ancianos.”

En este caso, y según lo narrado por la misma parte actora, se evidencia que el 10 de marzo de 2017, el señor Santiago Betancourt, quien se reitera contaba con 92 años, cruzó la vía sin ningún tipo de acompañamiento, actuando de manera imprudente y negligente, y poniendo en grave riesgo su vida.

En conclusión, tras el análisis fáctico y normativo del caso, encontramos sin lugar a dudas que el comportamiento del señor Santiago Betancourt Muñoz fue totalmente negligente, imprudente, irresponsable y contrario a las normas de tránsito. Además, teniendo en cuenta que la impericia con la que actuó el peatón, hizo inevitable la ocurrencia del accidente. En ese sentido, es completamente evidente ante la lógica fáctica de los sucesos ocurridos, que el causante del accidente de tránsito fue justamente la víctima por su actuar imprudente, irresponsable y negligente. En consecuencia, se deberán negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Por lo anterior, solicito señor Juez se tenga como probada esta excepción.

2. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LOS DEMANDADOS POR LA FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL.

Para que se pudiera configurar la responsabilidad a cargo del extremo pasivo de la litis, era necesario que el extremo actor desde la presentación de la demanda probara el factor estructural de la responsabilidad, esto es, el nexo causal entre la supuesta acción desplegada por el Fredy Nativel Muñoz Gómez en calidad de conductor del vehículo de placas SHT-462 y los perjuicios sufridos por el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D.). No obstante, como resultó probado en el plenario, el accidente del 10 de marzo de 2017 se produjo por el actuar negligente e imprudente del propio lesionado, el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D.). Así mismo, es importante tener en cuenta que sin perjuicio de que se haya configurado la causal exonerativa por el actuar negligente e imprudente de la víctima, tampoco se aportó una prueba que demuestre que los perjuicios alegados son causalmente atribuibles al extremo pasivo.

Ahora bien en la teoría de la causalidad adecuada aplicada en Colombia. A diferencia de la teoría de la equivalencia de condiciones, en la que simplemente basta aplicar el método de la supresión mental hipotética y determinar si el hecho final se hubiere o no presentado o no con determinada actuación. La teoría de la causa adecuada exige un filtro adicional, en el que de esa multiplicidad de causas que se pueden presentar en el mundo fenomenológico que pueden ser condiciones *sine qua non*, serán relevantes solo aquellas de las que fuera previsible el resultado. Doctrina autorizada y reciente confluye en aseverar que para declarar la responsabilidad es necesaria la concurrencia de tres elementos indispensables, a saber:

“Es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.”⁶ (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En ese sentido, debe precisarse que una actividad peligrosa es la que puede producir daños incontrolables e imprevisibles, tal como lo advierte la sociología en las situaciones impredecibles, incalculables y catastróficas de la sociedad del riesgo contemporánea. De ahí, que la obligación de indemnizar en este tipo de responsabilidad no puede depender del control o la previsión de las consecuencias, pues ello supondría imponer un criterio de imputación basado en la previsión de lo imprevisible. Ahora bien, la labor persuasiva debe orientarse a establecer cuál de todos los comportamientos antijurídicos ocasionó el daño. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

“(…) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más ‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo”⁷

En efecto, el concepto de peligrosidad de la actividad, empero, no ha sido definido bajo un criterio jurídico general, sino que suele explicarse mediante ejemplos tales como la velocidad alcanzada, la naturaleza explosiva o inflamable de la cosa utilizada, la energía desplegada o conducida, entre otras situaciones cuya caracterización ha sido delimitada por la jurisprudencia. Del mismo modo, en este punto es menester aclarar que la responsabilidad civil supone resarcir un daño generado con ocasión de un hecho que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino que opera entre quienes ha vinculado únicamente el

⁶ Patiño, Héctor. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano”. Revista Derecho y Justicia N14. Universidad Externado de Colombia. 2008

⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 15 de enero de 2008. Expediente 87300.

azar. En particular, la responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas, como sucede con la conducción de vehículos automotores, supone (i) que la víctima demuestre el ejercicio de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre ambos; (ii) que el presunto responsable solo podrá exonerarse, salvo norma en contrario, demostrando la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad que rompa el nexo causal; y (iii) que en los casos de actividades peligrosas concurrentes el juez deba examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce el daño para establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada actor.

De manera que en la investigación dirigida a establecer si fue destruido el nexo causal o a ponderar el grado de incidencia de la conducta de la víctima, entre los varios antecedentes que en forma hipotética ocasionaron el daño. Únicamente deben dejarse los que, atendiendo los criterios dichos en la jurisprudencia, tuvieron la aptitud para producirlo, mas no los que simplemente emergieron como factores meramente circunstanciales.

En el caso concreto, es menester señalar que la parte Demandante en el presente asunto no acreditó los elementos para la configuración de la responsabilidad civil. En tal sentido, de conformidad con el artículo 2341 del Código Civil que dispone que quién ha inferido daño a otros está obligado a la indemnización. En relación con tal precepto, cuando un sujeto de derecho, a través de sus acciones u omisiones causa injustamente un daño a otro y existe además un factor o criterio de atribución subjetivo por regla general y excepcionalmente objetivo, que permita trasladar dicho resultado dañoso a quien lo ha generado. Surge a su cargo un deber de prestación y un derecho de crédito en favor de la persona que ha sufrido el detrimento y que en todo caso tiene como fin la reparación del daño inferido. No obstante, en este caso no existe prueba alguna que acredite relación de causalidad entre el supuesto perjuicio alegado y la actuación del conductor del vehículo de placas SHT-462. Por ende, la falencia de este requisito indispensable destruye cualquier posibilidad de erigir válidamente un cargo de responsabilidad en contra de los Demandados.

Así las cosas, resulta evidente el rompimiento del nexo causal por cuanto la ocurrencia del accidente fue provocada por la conducta negligente e imprudente del señor Santiago Betancourt, toda vez que cruzó sin observar la vía. Lo expuesto de forma previa se puede observar, de acuerdo a lo determinado en el IPAT, en donde se atribuye las causas del accidente exclusivamente al peatón, señor Santiago Betancourt Muñoz, con la codificación No. 409 correspondiente a "PEATÓN CRUZA SIN OBSERVAR".

En cualquier caso, dicho nexo causal que pretende hacer valer la parte Demandante en este proceso, no se encuentra acreditado mediante ninguna prueba documental y/o elemento de juicio que permita demostrar que las lesiones del señor Betancourt Muñoz ocurrieron por alguna acción u omisión del conductor del vehículo asegurado. Por el contrario, lo que se reflejó del análisis de las pruebas documentales, fue justamente que en este caso operó la causal de exclusión "hecho de la víctima". Razón por la cual, al no encontrarse acreditado un nexo causal, no podría endilgársele ningún tipo de responsabilidad por no encontrarse demostrado uno de los elementos estructurales de la misma.

En conclusión, para configurarse los elementos de la responsabilidad civil es necesario que concurren los siguientes elementos: i) hecho generador, ii) daño y iii) nexo de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación. Sin embargo, verificados los elementos probatorios que obran dentro del expediente, no se logra establecer que se reúnan los elementos de la responsabilidad civil dentro del presente asunto, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la conducta realizada y el daño generado. Lo anterior, toda vez, que como se ha expuesto a lo largo de esta contestación, se trató de circunstancias meramente imputables a la conducta de la víctima, el señor Santiago Betancourt Muñoz. Razón por la cual, deberán negarse las pretensiones de la demanda. Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

3. SUBSIDIARIA: REDUCCIÓN DE INDEMNIZACIÓN EN ATENCIÓN A LA CONCURRENCIA DE CULPAS.

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, en virtud de las cuales es evidente que no existe obligación indemnizatoria de la pasiva, por no configurarse su responsabilidad civil por el hecho exclusivo de la

víctima, en gracia de discusión, si hipotéticamente se considerara que el conductor del vehículo SHT-462 desplegó una conducta imprudente, lo cierto es que de todos modos es evidente la incidencia del señor Santiago Betancourt Muñoz en los hechos y su participación determinante en la ocurrencia del evento.

Como primera medida, es menester recordar que la conducta positiva de la víctima en la ocurrencia del hecho puede tener incidencia relevante al momento de realizar el examen de la responsabilidad civil. En este sentido, su comportamiento puede corresponder a una condición del daño acaecido. En ese orden de ideas, la problemática de la concurrencia de culpas se resuelve en el campo objetivo de las conductas de lesionado y actor, y en la secuencia causal de las mismas en la generación del daño. Tal entendimiento debe hacerse, claro, considerando aspectos relevantes sobre la forma en que se generó el daño y quién incrementó o disminuyó el riesgo.

En este sentido, debe determinarse si la actuación de quien sufrió el daño fue o no determinante, o se constituyó en motivo exclusivo o concurrente de su mismo padecer. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

“(...) Por el contrario, si la actividad del lesionado resulta “en todo o en parte” determinante en la causa del perjuicio que ésta haya sufrido, su proceder, si es total, desvirtuará correlativamente, “el nexo causal entre el comportamiento del presunto ofensor y el daño inferido”, dando paso a exonerar por completo al demandado del deber de reparación; en tanto, si es en parte, a reducir el valor de ésta.

En otras palabras, para que el interpelado pueda liberarse plenamente de la obligación indemnizatoria, se requiere que el proceder de la víctima reúna los requisitos de toda causa extraña, esto es, “que se trate de un evento o acontecimiento exterior al círculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad”, como causa exclusiva del reclamante o de la víctima.

Y de otro, según lo preceptúa el artículo 2357 del Código Civil, cuando en la producción del daño participan de manera simultánea agente y lesionado, circunstancia que no quiebra el “nexo causal”, indiscutiblemente conduce a una disminución proporcional de la condena resarcitoria impuesta eventualmente al demandado, la cual, se estimará dependiendo el grado de incidencia del comportamiento de la propia víctima en la realización del resultado lesivo (...)⁸
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En esta medida, al momento de realizar el análisis sobre la causa del daño, el juzgador debe establecer mediante un cuidadoso estudio de las pruebas, la incidencia del comportamiento desplegado por cada parte alrededor de los hechos que constituyan causa de la reclamación pecuniaria.

Expuesto lo anterior, y considerando que en este caso en particular corresponde al demandante probar el daño y la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado, atendiendo a la presunción por la concurrencia de actividades peligrosas, es evidente que dentro del plenario no se dispone de pruebas que demuestren de manera concluyente la existencia de una conexión causal entre las acciones de los demandados y el daño alegado, y especialmente considerando que dentro del expediente es claro que la desatención de las normas de tránsito por parte del señor Santiago Betancourt Muñoz, resultaron definitivas para la provocación del daño, resulta evidente que se debe eximir de toda responsabilidad a la parte demandada, o en su defecto, disminuir el monto de indemnización en vista de la participación de la víctima en el acaecimiento de los hechos. Todo lo anterior por la compensación de culpas, según el precepto contenido en el artículo 2357 del Código Civil, en el que se preceptúa que la reducción de una indemnización se debe por la participación de la víctima. Es decir, si el que ha sufrido el daño se expuso a él.

⁸ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 06 de abril de 2001, rad. 6690.

En conclusión, este honorable despacho debe considerar tan siquiera la concurrencia de culpas en un porcentaje de al menos el noventa por ciento (90%), pues las conductas efectuadas por parte del señor Santiago Betancourt Muñoz, resultaron definitivas para la provocación del daño. Así, en el remoto e hipotético caso que mi representada esta llamada a efectuar algún tipo de indemnización deberá la misma verse reducida conforme al porcentaje de participación de la víctima en la ocurrencia del accidente.

4. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LOS DEMANDANTES

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar al Honorable Despacho que el extremo procesal activo no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral. Lo anterior, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de los demandantes, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien es cierto que no existen criterios objetivos de aplicación mecánica respecto a la cuantificación de los daños morales, cabe resaltar que los tipos de perjuicios extrapatrimoniales que solicita la parte actora sean reparados económicamente, resultan o tratan de una compleja tipología de perjuicios cuya configuración depende de la existencia de una serie de elementos subjetivos. Lo anterior, además de que su tasación si bien se encuentra deferida “*al arbitrium iudicis*”, es decir, al recto criterio del fallador, de todas maneras, deben ser debidamente acreditados, demostrados y tasados por quien los pretende. Teniendo en cuenta adicionalmente, que este tipo de perjuicios “*se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables*”.⁹

Ha señalado igualmente la Corte¹⁰ que, dentro de la concepción jurídica de los perjuicios extrapatrimoniales, específicamente respecto al daño moral, por ejemplo, no hay una valoración pecuniaria en sentido estricto, ya que al pertenecer a la psiquis de cada persona “*es inviable de valorar al igual que una mercancía o bien de capital*”. De ahí entonces que sea razonable estimar que, (i) en cada caso el Juez realice una valoración concreta, con la debida objetividad y conforme lo que se logre probar en el transcurso del proceso; y, (ii) no resulta apropiado que las partes puedan estimar el valor económico de su propio sufrimiento, “*ya que eso iría en contravía de la naturaleza especial del perjuicio inmaterial o espiritual, que escapa al ámbito de lo pecuniario*”.

La tasación del daño moral efectuada por el extremo actor en las pretensiones de la demanda de 100 SMLMV por cada demandante es a todas luces exorbitante y carece de cualquier sustento normativo y/o jurisprudencial. En ese sentido, es claro que la parte demandante está efectuando una petición que excede con creces los baremos máximos establecido por la jurisprudencia¹¹, razón por la cual, la suma solicitada no puede ser reconocida, incluso, en el remoto evento en que se llegase a demostrar la presunta responsabilidad endilgada al extremo pasivo.

Siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 23/05/2018, MP: Aroldo Wilson Quiroz, Rad: 11001-31-03-028-2003-00833-0, en donde se estableció que se reconocerá una suma por concepto de daño moral una suma máxima de \$60.000.000 cuando nos encontramos ante daños permanentes, y sean familiares consanguíneos de primer grado.

“En todo caso, conviene tener a la vista que esta Corporación, para eventos de daños permanentes con comprobada trascendencia en la vida de los afectados, ha accedido a reparaciones morales de \$50.000.000 (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.º 2000-00196-01) y

Bogotá – Cra 11A No.94A-23 Of. 201
Edificio 94ª
+57 3173795688

Cali - Av 6A Bis #35N-100, Of. 212
+57 3173795688

⁹ Sentencia de casación civil de 13 de mayo de 2008, Exp. 1997-09327-01.

¹⁰ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 11 de mayo de 2017, Radicado: 11001-02-03-000-2017-00405-00

¹¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia del 07 de marzo de 2019. M.P. Octavio Augusto Tejero Duque

\$60.000.000 (SC9193, 28 jun. 2017, rad. n.º 2011-00108-01), equivalentes a 72,5 y 81,3 salarios mínimos vigentes para la fecha de las condenas, respectivamente, razón por la que 20 smlmv no se advierte como una indemnización desatinada en un caso con consecuencias temporales”

Según las jurisprudencias citadas, es inviable el reconocimiento de los perjuicios morales en las sumas pretendidas por la parte demandante. Pues en primer lugar, solicitar la suma de cien (100) SMLMV, para sobrinos. petición que resulta antitécnica, pues no se aportó un documento o una sola prueba que diera cuenta de las supuestas secuelas psicológicas padecidas por los demandantes, mucho menos cuando el tope fijado por la Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia corresponde a \$60.000.000 en los casos más graves, como en casos de muerte para familiares **consanguíneos de primer grado**. En tal virtud, las pretensiones invocadas por la parte demandante evocan un evidente ánimo especulativo.

Ha señalado igualmente la Corte¹² que, dentro de la concepción jurídica de los perjuicios extrapatrimoniales, específicamente respecto al daño moral, por ejemplo, no hay una valoración pecuniaria en sentido estricto, ya que al pertenecer a la psiquis de cada persona *“es inviable de valorar al igual que una mercancía o bien de capital”*. De ahí entonces que sea razonable estimar que, (i) en cada caso el Juez realice una valoración concreta, con la debida objetividad y conforme lo que se logre probar en el transcurso del proceso; y, (ii) no resulta apropiado que las partes puedan estimar el valor económico de su propio sufrimiento, *“ya que eso iría en contravía de la naturaleza especial del perjuicio inmaterial o espiritual, que escapa al ámbito de lo pecuniario”*.

Véase como, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SC5686-2018, realizó una clara distinción entre grupos o niveles de parentesco, y, en ese sentido, a los hermanos, abuelos y nietos de los fallecidos, reconoció un 50% o la mitad de lo otorgado a padres, hijos, esposos (as) o compañeros permanentes. Este precedente resulta relevante, ya que evidencia que, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la indemnización de perjuicios extrapatrimoniales, en especial por daño moral, disminuye significativamente conforme más lejano o elevado sea el grado de parentesco de los demandantes respecto de la víctima.

En este caso, siendo los demandantes sobrinos del señor Santiago Betancourt, es decir, ubicándose en el tercer grado de consanguinidad, se advierte que deberán acreditar de manera inequívoca el perjuicio alegado, y el monto reconocido, de probarse dicho daño, no podrá exceder del 35% de lo asignado a los familiares de primer grado de consanguinidad.

En este sentido, al encontrarse los demandantes en un grado de consanguinidad más alejado, es indispensable que exista una prueba contundente que acredite los daños alegados, circunstancia que, evidentemente, no se cumple en el presente caso, sumado a que los montos solicitados superan con creces los límites fijados hasta para parientes de primer grado de consanguinidad.

En conclusión, es inviable el reconocimiento del daño moral pretendido por la parte actora, pues la tasación propuesta es equivocada y en algunos casos, no tiene ningún tipo de fundamento para su solicitud. En tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto de daño moral que supere los montos fijados a partir de la Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 11/05/2017, MP: Aroldo Wilson Quiroz, Rad: 11001-02-03-000-2017- 00405-00, en donde se estableció que en los casos más graves como es la muerte únicamente se le podrá reconocer a sus familiares en primer grado de consanguinidad la suma de \$60.000.000.

5. IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA-FALTA DE PRUEBA DEL PERJUICIO

¹² Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 11 de mayo de 2017, Radicado: 11001-02-03-000-2017- 00405-00

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, se propone esta excepción a fin de poner presente al despacho que son improcedentes todas las acciones tendientes a obtener el reconocimiento de perjuicios en la modalidad de lucro cesante, comoquiera que los supuestos de orden fáctico y jurídico no permiten que la pretensión que se solicita bajo esta modalidad pueda configurarse. En efecto, a través del escrito introductorio, se hace evidente que la parte actora confunde los conceptos de lucro cesante y daño emergente, puesto que, aunque el actor reclama el pago de \$1.480.000 por lucro cesante, lo asocia a los gastos de transporte realizados por los demandantes. Así, conforme al Artículo 1614 del Código Civil, queda claro que, al solicitar el reembolso de un monto presuntamente ya desembolsado, se configura un daño emergente y no un lucro cesante. Pero que en todo caso existe una totalidad orfandad probatoria frente a la causación de este perjuicio, situación que implicará la negatoria de dicha pretensión.

El ordenamiento jurídico colombiano ha sido claro al establecer que el lucro cesante debe entenderse como aquellos perjuicios materiales que surgen por la pérdida de un beneficio económico que se esperaba obtener, pero que debido al daño ya no será posible recibir, como puede comprobarse:

“Artículo 1614. Daño emergente y lucro cesante. Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento.”

(Énfasis propio)

De esta manera, es claro que la parte demandante cometió un error al establecer que esta pretensión es de lucro cesante, puesto que se establece de manera clara que el monto solicitado

PERJUICIOS MATERIALES

Lucro cesante causado, servicio funerario FACTURA No. 1155 servicios exequiales el recuerdo TOTAL GASTOS FUNEBRES-----\$1.480.000

Así, se contempla que el dinero solicitado se refiere a dineros ya supuestamente desembolsados, que se utilizaron para los supuestos servicios funerarios del señor Santiago Betancourt Muñoz, por lo cual este tipo de perjuicios se configuraría dentro de la tipología de perjuicio conocido como daño emergente. Sin perjuicio de lo anterior, su Despacho deberá tener en cuenta que en virtud del principio de congruencia que rige las actuaciones judiciales, no podrá adecuarse una pretensión del demandante, en tanto la misma fue pedida de manera equivocada.

Finalmente debe resaltarse que la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.480.000) que erróneamente se solicitan por concepto de lucro cesante por los supuestos gastos de “servicios funerarios” es una pretensión antitécnica, puesto que es claro que esta pretensión no constituye lucro cesante, toda vez que no son rubros que hayan dejado de ingresar al patrimonio del demandante. Por lo demás, y en gracia a discusión, aún si se entendiera como daño emergente, no obra siquiera elementos demostrativos que permitan determinar que se han realizado dichas erogaciones de dinero. No existe prueba que dé cuenta que los demandantes debieron pagar por estos costos, situación que deja ver una clara indeterminación de los gastos reclamados y un ánimo especulativo de los mismos. Corolario de lo anterior, debe resaltarse que el perjuicio indemnizable es aquel que goza de certeza y que responde efectivamente al daño causado, pues estos son presupuestos que eliminan el ánimo especulativo y la tasación exorbitante de pretensiones. Así las cosas es evidente que si en el proceso no se encuentra primero prueba de que algún ingreso dejó de percibirse como consecuencia de un hecho lesivo la conclusión es que no se ha causado un lucro cesante, pero incluso si se adecuara la pretensión solicitada por el demandante al concepto de daño emergente lo cierto es que incluso esa suma tampoco está llamada a indemnizarse porque no existe medio de prueba que demuestre el desplazamiento patrimonial que presuntamente ha sufrido la parte actora. Luego la falta de prueba de una merma económica trae como consecuencia que el despacho deba negar las pretensiones de la demanda.

Por lo anteriormente expuesto, solicito declarar probada esta excepción.

6. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA

Es imposible imponer una condena y ordenar el resarcimiento de un detrimento por perjuicios no demostrados o presuntos, o si se carece de la comprobación de su magnitud y realización, ya que no es admisible la presunción en esa materia, de manera que una indemnización sin fundamentos fácticos ni jurídicos necesariamente se traducirá en un lucro indebido, como sucedería en un caso como el presente. Solicito a usted señor Juez, declarar probada esta excepción.

7. GÉNÉRICA Y OTRAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso¹³, solicito sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, ya sea frente a la demanda o al contrato de seguro utilizado para convocar a mi representada al presente litigio mediante acción directa.

B. EXCEPCIONES FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO.

8. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO.

Pese a que mi representada de ninguna manera está obligada a pago de indemnización alguna, en todo caso invoco como excepción la prescripción consagrada en el Artículo 1081 del Código de Comercio, toda vez que es importante que este respetado despacho tenga en consideración que mi representada ha sido vinculada a este proceso de responsabilidad civil extracontractual, en virtud de la existencia del contrato de Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, certificado AA035497. Es entonces señor(a) Juez que en este evento se ejercita la acción directa debido al contrato de seguro que amparaba al vehículo SHT-462, sin embargo no puede perderse de vista que en este caso ha operado la prescripción extintiva de la acción frente a la compañía aseguradora sea por la vía extraordinaria, comoquiera que, el hecho que da base a la acción, es decir el accidente, ocurrió el 10 de marzo de 2017, se interrumpió el término el 12 de septiembre de 2018, cuando la parte demandante presentó la reclamación directa a mi representada, y la demanda tan solo se interpuso hasta 15 de octubre de 2024, es decir, **6 años, 1 mes y 3 días** después, cuando la prescripción más extensa es de 5 años, es decir que, ante la inactividad de los accionantes se configuró el fenómeno prescriptivo que impide generar obligaciones a cargo de mi representada La Equidad Seguros Generales O.C.

Al efecto, el Código de Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros y en su artículo 1081 establece previsiones no sólo con relación al tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Dicho precepto establece lo siguiente:

“(...) ARTÍCULO 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes (...)”

Bogotá – Cra 11A No.94A-23 Of. 201
Edificio 94^a
+57 317 3735688
Cra. 6A Bis #35N-100, Of. 212
+57 315 577 6200 - 602.6504075

¹³ **Artículo 282. Resolución sobre excepciones.** En cualquier tipo de proceso, cuando el juez ~~halla probados los hechos~~ que constituyen una excepción ~~deberá~~ reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y ~~modificación~~ ~~relativa~~ que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

Al señalar la disposición transcrita los parámetros para la determinación del momento a partir del cual empiezan a correr los términos de prescripción, distingue entre el momento en que el interesado, ha tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, en la prescripción ordinaria y, el momento del nacimiento del derecho, independientemente de cualquier circunstancia y aún cuando no se pueda establecer si el interesado tuvo o no conocimiento de tal hecho, en la extraordinaria. Se destaca entonces, el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, como rasgo que diferencia la prescripción ordinaria de la extraordinaria, pues en tanto en la primera exige la presencia de este elemento subjetivo, en la segunda no.

En síntesis, la prescripción ordinaria de que trata el Artículo 1081 del Código de Comercio es completamente aplicable al caso que nos ocupa, comoquiera que se acredita la presencia de los elementos subjetivos que se requiere para su declaratoria y que se diferencia de la prescripción extraordinaria que le corre a las demás clases de personas.

En otras palabras, los hoy demandantes tuvieron conocimiento de los hechos, pues de acuerdo con la prueba documental obrante en el plenario, indiscutiblemente conocieron del accidente y la consecuente muerte de su familiar el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D). Igualmente, tuvieron conocimiento de su facultad para accionar desde el momento en el que formularon una solicitud de indemnización a La Equidad Seguros Generales O.C. momento en el cual, sin lugar a dubitaciones, conocían a la perfección la existencia del contrato de seguro por medio del cual se amparó al vehículo involucrado y su posible calidad de beneficiarios.

Es así como a partir de la fecha de respuesta de la solicitud de indemnización, 12 de septiembre de 2018 empezó a correr el fenómeno de prescripción y que se configuró teniendo en cuenta los siguientes hitos temporales:

- El accidente como hecho que da base a la acción ocurrió el 10 de marzo de 2017.
- Los demandantes presentaron reclamación directa a la compañía el 12 de septiembre de 2018. De tal manera, interrumpiendo el término de la prescripción. Recordemos que conforme al artículo 94 del CGP, la interrupción solo puede darse una vez.
- El 10 de octubre de 2018, La Equidad Seguros Generales O.C. objetó la reclamación radicada por los demandantes.
- Presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial por parte de los demandantes fue el 03 de octubre de 2019
- Fecha en la que se dio constancia de no acuerdo, el 21 de enero de 2020
- Inicio de suspensión de términos según Decreto 564 del 2020: 16 de marzo de 2020. Término fue de 3 meses y 14 días.
- Las partes contaban hasta el 18 de abril de 2024, para iniciar la acción en contra de mi representada La Equidad Seguros Generales O.C
- La presente demanda que ahora ocupa la atención de su despacho únicamente se presentó hasta el 15 de octubre de 2024, cuando la prescripción ya se había configurado.

Considerando los hitos temporales antes enunciados, es claro que incluso la prescripción extraordinaria para ejercer la acción directa en contra de mi representada feneció con creces, sin que se verificara que la parte accionante hubiera interrumpido el término prescriptivo, pues no inició ningún tipo de acción en contra de La Equidad Seguros Generales O.C y por ende ante la inactividad de la parte demandante en los términos que consagra la ley, es claro que en este caso no puede existir obligación indemnizatoria a cargo de la Compañía aseguradora.

En conclusión, probado como se encuentra, desde el 12 de septiembre de 2018 (fecha en que se radico la reclamación directa a la compañía) hasta la fecha de presentación de la demanda transcurrieron más de 6 años superando con creces el termino de prescripción extraordinaria. De tal suerte que como la parte demandante no interpuso la demanda dentro de los términos del artículo 1081 del C.Co, la prescripción operó y por ende no podrá surgir obligación alguna a cargo de La Equidad Seguros Generales O.C.

Por lo anteriormente expuesto ruego a Usted, Señor Juez, declarar probada la excepción propuesta.

9. FALTA DE COBERTURA MATERIAL ANTE LA CONFIGURACIÓN DE RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS DEL AMPARO DE LA PÓLIZA

En atención a que el contrato de transacción suscrito entre el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D.) y el señor Fredy Muñoz Gómez, no fue autorizado, aceptado y/o consentido por mi procurada. Así, se configura un riesgo expresamente excluido del amparo de la póliza, aparejando ello la falta de cobertura material. Por tal motivo, al estar ante una causal de exclusión de cobertura, deberá el H. Juez denegar las pretensiones de la demanda, pues los hechos materia de litigio no fueron un riesgo previamente trasladado al asegurador.

En el entendido de que con base al artículo 1056 del Código de Comercio el asegurador puede a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume, en reciente fallo del 04 de abril de 2022¹⁴ la Corte recordó:

*“(…) **ante la amplitud de los eventos que son susceptibles de ser amparados, la aseguradora puede especificar «los riesgos cuya cobertura se obligan en virtud de la misma»** (SC8435, 2 jul. 2014, rad. n.º 2002-00098-01), como lo reconoce el artículo 1056 del Código de Comercio, a saber: «[c]on las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado».*

*Refiriéndose a este precepto, la Corporación dijo que en la especificación de los riesgos «**se reconoce plena autonomía al asegurador, a quien el artículo 1056 ejusdem, norma aplicable a los seguros de daños y de personas, le otorgó la potestad de delimitar espacial, temporal, causal y objetivamente los eventos por cuya ocurrencia se obligaría condicionalmente a indemnizar al beneficiario**, pues estatuyó que podía asumir, con las restricciones legales» (SC4527, 23 nov. 2020, rad. n.º 2011- 00361-01).*

*(…) Estas estipulaciones, conocidas como «**cláusulas de exclusión**», tienen por finalidad **limitar «negativamente el ‘riesgo asegurado’, al dejar por fuera de cobertura algunas situaciones que podrían estar allí comprendidas y que, por ende, de acontecer no son indemnizables. De tal manera que su consagración no conduce a la desaparición o alteración del componente económico previsto en favor de los beneficiarios, sino a la imposibilidad de que las reclamaciones por los hechos al margen de la protección tengan éxito»** (SC4574, 21 ab. 2015, rad. n.º 2007-00600-02) (…)” (Énfasis de autoría)*

Al respecto, resulta oportuno señalar que, a su vez, la Doctrina ha sido pacífica al entender el contrato de seguro como un acto jurídico que proviene de la voluntad de las partes, siendo, por tanto, una expresión del principio de la autonomía de la voluntad privada. De tal suerte, autores como como Castro (2019) han sostenido que:

“(…) Quien celebra un negocio jurídico en virtud de la autonomía privada está creando una nueva relación jurídica, que no existía aún. [...] La autonomía privada únicamente tiene sentido desde el derecho, como la posibilidad de crear, modificar o extinguir relaciones y normas jurídicas. [...] Se trata de un poder normativo, es decir, una potestad de crear normas jurídicas y la autonomía de la voluntad es la fuente de que ellas se derivan (...)”¹⁵

¹⁴ Sentencia SC487-2022 del 04 de abril de 2022. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

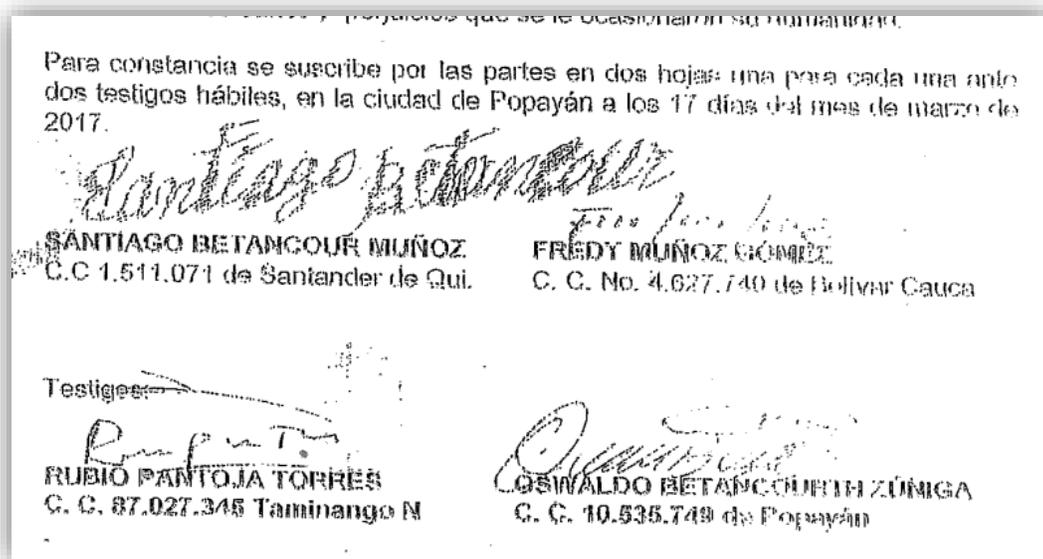
BSDM

¹⁵ Castro de Cifuentes, M. (2019). Los contratos normativos y los contratos marco en el derecho privado contemporáneo. *Estudios Socio-Jurídicos*, 21(1), 121-150.

Igualmente, como lo explica Ospina Fernández (2005), este postulado se fundamenta en la independencia que otorga el legislador a los particulares para regular sus propias relaciones sociales. En otras palabras, se otorga eficacia jurídica a la iniciativa privada para atribuir los efectos que mejor se enmarquen a su propósito particular¹⁶. Así pues, como una manifestación de la autonomía de la voluntad privada, de conformidad con las condiciones particulares y generales del contrato de seguro instrumentado a mediante Póliza de Seguro Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, clausulado número 01062010-1501-P-03-000000000000103 se establecieron los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo mi representada delimitando la extensión del riesgo asumido por ella. Señalando así expresamente que la póliza no brindaría cobertura cuando se realizaran acuerdos no autorizados y/o consentidos mi procurada, estipulándose al respecto lo siguiente:

2.20. CUANDO EL TOMADOR, ASEGURADO O CONDUCTOR SE DECLARE RESPONSABLE O EFECTÚE ARREGLOS TRANSACCIONES O CONCILIACIONES SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO PREVIO DE LA EQUIDAD.

De tal suerte, de conformidad con el contrato de transacción válidamente celebrado entre el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D.) y el señor Fredy Muñoz Gómez, en calidad de presunto conductor del vehículo de placa SHT-462, sin contar con el consentimiento y/o aquiescencia previa y por escrito de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., es palmaria la configuración de una causal de exclusión de cobertura de la póliza.



Consecuentemente al ser clara la configuración de la causal de exclusión 2.20, relativa a la suscripción de contrato transaccional sin la autorización y/o aquiescencia de la compañía aseguradora, la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, no podrá operar al interior del presente caso por ausencia de cobertura material de conformidad con lo expresamente pactado por las partes al momento de suscribir la póliza en comento.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

10. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Es necesario aclarar que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo

¹⁶ Ospina Fernández, G. (2005). TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO JURÍDICO. Editorial Temis, S.A.

asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. En el caso concreto no se ha demostrado la realización del riesgo asegurado, es decir la responsabilidad civil extracontractual a cargo del conductor del vehículo asegurado de placas SHT-462 y mucho menos el monto de los perjuicios pretendidos, por ende, no es posible predicar la existencia de obligación a cargo de La Equidad Seguros Generales O.C.

Para efectos de las solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte Demandante. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

“(…) ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad (…) (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

“(…) Es asunto averiguado que en virtud del negocio asegurativo, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”

“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.** (…)* Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que *“el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)*”

“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080) (…)”¹⁷ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del accidente, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro. Consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Puesto que, de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia:

¹⁷ ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fideicomiso, Prescripción, Seguros, Unión, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125

“(…) 2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.

2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).

2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (...), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).

2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario” (art. 1089, ib.) (....)”¹⁸

La Corte Suprema de Justicia, ha establecido la obligación de demostrar la cuantía de la pérdida:

“(…) Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. Así mismo, no cuantifica una pérdida. De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio. En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios (...)”¹⁹ (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando se quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrarse la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrarse la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte Demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1077 del C. Co. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del Asegurador. A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

(i) La no realización del Riesgo Asegurado.

Sin perjuicio de las excepciones de la contestación de la demanda, se formula esta de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Mediante la póliza en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio. Sin embargo, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró, pues ante la inexistencia de nexo causal entre las conductas de los demandados y el daño reclamado por la parte Actora, derivado de la culpa exclusiva de la víctima, no

procede reclamación alguna con cargo a la póliza de seguro. Puesto que no se han reunido los elementos esenciales para que sea procedente declarar la Responsabilidad Civil Extracontractual.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la Aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado o conductor autorizado del vehículo de placas SHT-462. Sin embargo, la demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de los demandados y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró. Por lo anterior, es importante que el Despacho considere que efectivamente el riesgo asegurado corresponde a la responsabilidad en que incurra el asegurado o conductor autorizado del vehículo descrito en la póliza, circunstancia que en efecto no ocurrió, comoquiera que, el accidente es atribuible únicamente a la víctima Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D), por su conducta carente de cuidado. Además, no puede perderse de vista que la póliza estableció que se indemnizaran los perjuicios que se encuentren debidamente acreditados, lo que de facto implica que no es procedente las pretensiones de lucro cesante porque los hoy demandantes no han logrado acreditar dicho perjuicio a través de los medios pertinentes, conducente y útiles.

Por lo visto, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, es decir la responsabilidad civil extracontractual, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no existe nexo causal, pues el accidente fue producto del hecho de la víctima y por lo tanto no se ha demostrado que los perjuicios ocurrieron como consecuencia de las acciones u omisiones del asegurado ni del conductor autorizado por éste. Como consecuencia, no ha nacido la obligación condicional por parte de la Aseguradora.

(ii) Acreditación de la cuantía de la pérdida.

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, toda vez que no se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso. Lo anterior, puesto que el demandante solicita el reconocimiento de daño patrimonial, sin embargo, no justifica la suma solicitada mediante ninguna prueba o elemento de juicio suficiente. En ese sentido, al no existir prueba si quiera sumaria que permita acreditar la suma solicitada, la misma no puede ser reconocida con cargo a la Póliza de Seguro. De igual manera, es inviable el reconocimiento del daño moral pretendido por la parte actora, pues la tasación propuesta es equivocada y no tiene ningún tipo de fundamento para su solicitud. De modo que, ante la ausencia de acreditación del lucro, es improcedente el reconocimiento de indemnización por este concepto y como consecuencia, no podrá reconocerse emolumento alguno con cargo a la póliza de seguro.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse en primera medida que la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado o del conductor del vehículo de placas SHT-462. Por otro lado, respecto a la acreditación de la cuantía de la supuesta pérdida no se encuentra probada, comoquiera que el lucro cesante, y daño moral son claramente improcedentes y exorbitantes en este caso, teniendo en cuenta que no existe prueba que acredite las tipologías de daño deprecadas en la demanda con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 10 de marzo de 2017. Del incumplimiento de las cargas que imperativamente establece el artículo 1077 del Código del Comercio por la parte demandante, basta con remitirnos a las pruebas aportadas con la demanda, en donde se evidencia la carencia de elementos demostrativos que acrediten la realización del riesgo asegurado y la supuesta pérdida. Por tanto, es claro que no se cumplen las cargas del artículo 1077 del Código de Comercio por lo que deberán negarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

11. SUJECIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO, EN LA QUE SE IDENTIFICA LA PÓLIZA, EL CLAUSULADO Y LOS AMPAROS

En el caso en marras deberá el despacho tener en cuenta las condiciones particulares y generales pactadas en la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687 y, en ese sentido, será necesario que se efectúe un estudio pormenorizado de las mismas, las cuales se anexan al presente escrito a fin de que, de evidenciar que se configure alguna de ellas se falle con total apego a lo pactado por las partes en el contrato de seguro.

Es preciso señalar que de acuerdo con lo contemplado en el Art. 1044 del C. Co., LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., podrá proponer a los beneficiarios, la excepciones que pueda alegar en contra del tomador y el asegurado cuando son personas distintas. Por tanto, en caso de un fallo en contra este deberá ajustarse de acuerdo con las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro y dicha condena no podrá exceder los parámetros acordados por los contratantes.

Por lo tanto, en caso de que prosperen las pretensiones de responsabilidad civil de los demandantes contra mi representada, La Equidad Seguros Generales O. C., en ejercicio de la acción de reclamación directa de la víctima contra la aseguradora, tal relación deberá estar de acuerdo con el contrato de seguro denominado la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, en la cual se encuentran contenidas las condiciones particulares de la póliza y por las condiciones generales contenidas en la Forma 01062010-1501-P-03-0000000000000103.

12. CARÁCTER INDEMNIZATORIO DEL CONTRATO DE SEGURO

Comoquiera que no se encuentra acreditada la causación de perjuicio alguno en detrimento o afectación de la activa de la acción, no es dable la imposición de obligación indemnizatoria en cabeza de mi procurada, pues la póliza de seguro respecto a la cual se vincula a La EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., cuenta con un carácter meramente indemnizatorio. Lo que deviene en que la misma únicamente podrá afectarse dentro de los límites propios del resarcimiento de los perjuicios efectivamente acreditados.

Nuestro estatuto comercial privilegia y consagra la naturaleza del contrato de seguro como de naturaleza meramente indemnizatoria, determinando al respecto el artículo 1127 del Código de Comercio lo siguiente:

“(...) Art. 1127.-Modificado por la Ley 45 de 1990, artículo 84. Naturaleza del seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. (Subrayado y negrita, fuera del texto original)

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055 (...)” (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

En igual sentido, y originariamente la Corte Suprema de Justicia así lo ha establecido, según el fallo del 22 de julio de 1999, expediente 5065 en el que realizó la siguiente referencia:

“(...) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”²⁰ (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

²⁰ Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia del 22 de julio de 1999, expediente 5065 Magistrado Ponente: Nicolás Bechara **SDM**as

Ahora bien, en atención a que, de conformidad con el acervo probatorio que milita en el expediente no se acreditó la causación de ninguno de los perjuicios pretendidos los demandantes, pues se observa que: **(i)** Habría un enriquecimiento indebido si se reconociera cualquier suma por lucro cesante, ya que no hay pruebas que demuestren la imposibilidad de percibir ingresos o incluso si los costos del supuesto servicio funerario se tomaran como daño emergente, tampoco se ha probado la merma patrimonial derivada de dicho daño alegado. Todas estas razones evidencian que la solicitud indemnizatoria del demandante va en contra del carácter exclusivamente indemnizatorio del contrato de seguro; **(ii)** No se ha acreditado la materialización de perjuicios morales, y en cualquier caso, es palmario el desconociendo los rubros tasados y adjudicados por la Corte Suprema de Justicia. Esto significa, que si incumplirá el fin último del contrato de seguro que es la reparación, indemnización y/o compensación por los daños y perjuicios devenidos a partir de la configuración de un riesgo asegurado.

Consecuentemente, no es posible la imposición de obligación alguna en cabeza de mi procurada, pues ello devendría en un enriquecimiento sin justa causa que mi prohijada no se encuentra en la obligación de soportar, pues se observa que implicaría vulnerar el principio indemnizatorio.

Con fundamento en lo expuesto solicito declarar probada la presente excepción de mérito.

13. AUSENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE EQUIDAD SEGUROS Y LOS DEMÁS DEMANDADOS.

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no puede ser considerada como responsable en la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna. Máxime, en atención a que su relación con el vehículo de placa SHT-462 para el momento de presunta ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación De igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el artículo 2344 del Código Civil, si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa. Sin embargo, tal como ha señalado la Corte Suprema de Justicia²¹, la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mí representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes, la Corte²² igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

“(…) La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume. De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.

²¹ Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez

BSDM

²² *Ibíd.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización**. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (...)*” (Negrilla y Sublínea fuera de texto).

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, entre mi procurada y el tomador no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguradora por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 10 de marzo de 2017, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

En conclusión, mi procurada no puede ser tenida como responsable en la comisión del accidente de tránsito respecto al cual se erige el presente trámite comoquiera que su relación con el vehículo de placa SHT-462 para el momento de ocurrencia de los hechos se delimitó de conformidad con las condiciones del contrato de seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad.

Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

14. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE SEGURO RCE SERVICIO PÚBLICO NO. AA003687.

Sin perjuicio de lo expuesto en las excepciones precedentes, en gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de obligación de mi representada, se formula esta, en virtud de que contractualmente en la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, utilizada como fundamento para convocar a mi procurada al presente trámite, se estipularon las condiciones de la responsabilidad del asegurador, sus límites, los amparos otorgados, las exclusiones, las sumas aseguradas, etc. Estipulándose como límite máximo del valor asegurado determinado en la caratula de la póliza.

Ahora bien, es pertinente mencionar que la obligación del asegurador sólo se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del contrato, según su texto literal y por supuesto, la obligación indemnizatoria o de reembolso a su cargo se limita a la suma asegurada, siendo este el tope máximo. Además de que también son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el Código de Comercio, que en su artículo 1079, establece: “...*El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada...*”. Claro está, sin perjuicio del respectivo deducible pactado, es decir, de aquella porción que de cualquier pérdida le corresponda asumir al asegurado.

De acuerdo con los artículos 1079 y 1089 del Código de Comercio, la responsabilidad máxima del asegurador se limita a la suma asegurada, de manera que ese es el tope máximo de la responsabilidad asumida por la aseguradora, siempre y cuando no opere una causal de exclusión convencional o legal, como ocurre en el presente caso.

Ahora bien, es importante señalar que de conformidad con el condicionado aplicable a la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, el valor señalado en la carátula de la misma es el valor máximo asegurado destinado a indemnizar respecto al amparo de responsabilidad civil extracontractual.

Por consiguiente, en caso de ser condenados, existe un tope de la suma fijada en la carátula de la póliza de conformidad con lo concertado, dependiendo de la cobertura y lo anterior para la indemnización de todos los perjuicios. Así pues, en relación al contrato de seguro instrumentado a partir de la póliza de seguro, es importante señalar que para predicar algún tipo de obligación en virtud de la misma se deberán tener en cuenta los límites máximos de responsabilidad plasmados en ella, los cuales se aprecian en la siguiente imagen tomada de la carátula de la póliza:

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO				
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DED %	DED VALOR	PRIMA
Responsabilidad Civil Extracontractual Servicio Publico		.00%		\$.00
Daños a Bienes de Terceros	smmlv 100.00	10.00%	1.00 smmlv	\$.00
Lesiones o Muerte de una Persona	smmlv 100.00	.00%		\$.00
Lesiones o Muerte de Dos o Mas Personas	smmlv 200.00	.00%		\$.00
Protección Patrimonial		.00%		\$.00
Asistencia jurídica en proceso penal		.00%		\$.00
Lesiones		.00%		\$.00
Homicidio		.00%		\$.00

Por lo tanto, en el eventual, hipotético y remoto caso en que se determine la existencia de obligación indemnizatoria en cabeza de mi procurada, en ningún caso podrá superar la suma señalada en la caratula de la póliza siendo este el máximo valor al que mi procurada se obligó de conformidad con las condiciones generales y particulares del contrato de seguro.

Solicito declarar probada esta excepción.

15. DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna. Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

CAPITULO III

CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

FRENTE AL HECHO "1": De la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias afirmaciones, frente a las cuales me pronunciaré en el orden planteado en este hecho:

Es cierto que mi representada suscribió el contrato de seguro contenido en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. AA003687, con una vigencia comprendida desde el 01 de abril de 2016 al 01 de abril de 2017, por medio de la cual se ampara al vehículo automotor de placas SHT462. Sin embargo, ésta no presta cobertura teniendo en cuenta lo siguiente:

- (i) No se ha acreditado la realización del riesgo asegurado, es decir la responsabilidad civil extracontractual a cargo del conductor del vehículo asegurado de placas SHT-462 y mucho menos el monto de los perjuicios pretendidos, por ende, no es posible predicar la existencia de obligación a cargo de La Equidad Seguros Generales O.C.
- (ii) Ha operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro.
- (iii) Se configuro una exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro, pues se llegó a un arreglo transaccional o conciliación sin el consentimiento previo de mi prohijada, exclusión expresamente establecida en las condiciones de la póliza.

Ahora bien, es cierto que mi representada suscribió el contrato de seguro contenido en la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. AA003688, con una vigencia comprendida desde el 01 de abril de 2016 al 01 de abril de 2017, por medio de la cual se ampara al vehículo automotor de placas SHT462. Sin embargo esta no podrá prestar cobertura teniendo en cuenta que en este proceso se discute una responsabilidad civil extracontractual, riesgo que no fue amparado por la póliza RCC y por ende no presta cobertura material. Razón suficiente para que en este proceso no resulte procedente condena alguna en contra de mi representada, puesto que en la Póliza de Seguro No. AA003688 no se amparó la

responsabilidad civil extracontractual que se discute en el presente litigio, al respecto véase como la póliza RCC ampara “a los pasajeros del vehículo asegurado que sufran lesiones corporales derivadas de la responsabilidad civil contractual en que incurra el transportador asegurado”, circunstancia que de ninguna manera acaece en este litigio por cuanto se trató de un accidente entre un vehículo y un peatón.

CONDICIONES GENERALES

1. AMPAROS

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, QUE EN ADELANTE SE LLAMARÁ LA EQUIDAD, CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, INDEMNIZARÁ HASTA LA SUMA ASEGURADA Y POR ACCIÓN DIRECTA DE LA VÍCTIMA O SUS CAUSAHABIENTES, A LOS PASAJEROS DEL VEHÍCULO ASEGURADO QUE SUFRAN LESIONES CORPORALES DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TRANSPORTADOR ASEGURADO DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA, Y A LOS TÉRMINOS, ESTIPULACIONES, EXCEPCIONES Y LIMITACIONES CONTEMPLADAS EN ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO DICHO PASAJERO VIAJE EN EL COMPARTIMIENTO DESTINADO A LOS PASAJEROS O SE ENCUENTRE SUBIENDO O BAJANDO DEL MISMO, Y EL VEHÍCULO ESTÉ CUMPLIENDO CON ITINERARIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD TOMADORA.

FRENTE AL HECHO “2”: Conforme lo esgrimido frente al hecho primero, mi representada no está obligada a salir en garantía frente a una eventual indemnización por cuanto frente a la póliza de responsabilidad civil extracontractual, este no opera automáticamente, toda vez que (i) No se ha acreditado la realización del riesgo asegurado, es decir la responsabilidad civil extracontractual a cargo del conductor del vehículo asegurado de placas SHT-462 y mucho menos el monto de los perjuicios pretendidos, (ii) ha operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro, comoquiera que, entre la fecha que el llamante en garantía tuvo conocimiento de los hechos que dan base a esta acción y la formulación del llamamiento en garantía transcurrieron más de dos años, (iii) Se configuro una exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro, pues se llegó a un arreglo transaccional o conciliación sin el consentimiento previo de mi prohijada, exclusión expresamente establecida en las condiciones de la póliza.

Frente a la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. AA003688, esta no presta cobertura material teniendo en cuenta que en este proceso se discute una responsabilidad civil extracontractual, riesgo que no fue amparado por la póliza RCC y por ende no presta cobertura material. Razón suficiente para que en este proceso no resulte procedente condena alguna en contra de mi representada con fundamento en esta póliza RCC.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

ME OPONGO a frente a la alegación de que mi representada deba salir en garantía ante el eventual caso de una condena a favor de los demandantes, teniendo en cuenta la póliza de responsabilidad civil extracontractual, este no opera automáticamente, toda vez que (i) No se ha acreditado la realización del riesgo asegurado, es decir la responsabilidad civil extracontractual a cargo del conductor del vehículo asegurado de placas SHT-462 y mucho menos el monto de los perjuicios pretendidos, (ii) ha operado la prescripción ordinaria y extraordinaria de la acción derivada del contrato de seguro, (iii) Se configuro una exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro, pues se llegó a un arreglo transaccional o conciliación sin el consentimiento previo de mi prohijada, exclusión expresamente establecida en las condiciones de la póliza.

Frente a la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. AA003688, esta no presta cobertura material teniendo en cuenta que en este proceso se discute una responsabilidad civil extracontractual, riesgo que no fue amparado por la póliza RCC y por ende no presta cobertura material. Razón suficiente para que en

este proceso no resulte procedente condena alguna en contra de mi representada con fundamento en esta póliza RCC.

III. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO FRENTE AL ASEGURADO.

En el presenta caso se ha configurado el fenómeno jurídico de la prescripción ordinaria de la acción del contrato de seguro consagrada en el Artículo 1081 del Código de Comercio. En este evento se vincula a mi representada por medio de la acción de llamamiento en garantía con fundamento en contrato de seguro que amparaba al vehículo SHT-462. Sin embargo no puede perderse de vista que en este caso ha operado la prescripción extintiva de la acción que tiene la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE TIMBÍO frente a la compañía aseguradora, comoquiera que, el hecho que da base a la acción, es decir el accidente, ocurrió el 10 de marzo de 2017 y de acuerdo a la información que reposa en el expediente, el llamante en garantía conoció del hecho base de acción por citación a conciliación extrajudicial del 3 de octubre de 2019, es decir que desde ese momento comenzó a correr el término de prescripción de que trata el artículo 1081 del C.co por cuanto fue citado y compareció al proceso de conciliación promovido por los hoy demandantes, es decir que el llamante en garantía contaba con dos años para solicitar el amparo a mi representada y esto no ocurrió. El llamamiento en garantía se presentó el 28 de enero de 2025.

Es decir que, ante la inactividad del llamante en garantía se configuró el fenómeno prescriptivo que impide generar obligaciones a cargo de mi representada La Equidad Seguros Generales O.C. El Código de Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros y en su artículo 1081 establece previsiones no sólo con relación al tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Dicho precepto establece lo siguiente:

“(...) ARTÍCULO 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes (...)”

Al señalar la disposición transcrita los parámetros para la determinación del momento a partir del cual empiezan a correr los términos de prescripción, distingue entre el momento en que el interesado, ha tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, en la prescripción ordinaria y, el momento del nacimiento del derecho, independientemente de cualquier circunstancia y aún cuando no se pueda establecer si el interesado tuvo o no conocimiento de tal hecho, en la extraordinaria, véase al respecto lo reglado en el artículo 1131 del C.co:

*“Artículo 1131. Ocurrencia del siniestro. En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. **Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.**”*

Se destaca entonces, el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, como rasgo que diferencia la prescripción ordinaria de la extraordinaria, pues en tanto en la primera exige la presencia de este elemento subjetivo, en la segunda no.

En síntesis, la prescripción ordinaria de que trata el Artículo 1081 del Código de Comercio es completamente aplicable al caso que nos ocupa, comoquiera que se acredita la presencia de los elementos

subjetivos que se requiere para su declaratoria y que se diferencia de la prescripción extraordinaria que le corre a las demás clases de personas.

En otras palabras, el hoy llamante en garantía tuvo conocimiento de los hechos, pues de acuerdo con la prueba documental obrante en el plenario, indiscutiblemente conocieron del accidente y la consecuente muerte de su familiar el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D). Igualmente, tuvieron conocimiento de su facultad para accionar desde el momento en el que se les convocó a audiencia de conciliación extrajudicial, momento en el cual, sin lugar a dubitaciones, conocían a la perfección la existencia de la reclamación en su contra sin embargo no advirtieron a la aseguradora ni la convocaron para su cobertura dentro del término de dos años, por cuanto este llamamiento en garantía se presentó al despacho solo hasta el 28 de enero de 2025.

Es así como a partir de la fecha de 3 de octubre de 2019 empezó a correr el fenómeno de prescripción ordinaria y que se configuró teniendo en cuenta los siguientes hitos temporales:

- **El accidente como hecho que da base a la acción ocurrió el 10 de marzo de 2017.**
- **Presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial por parte de los demandantes fue el 03 de octubre de 2019.**
- **Fecha en la que se dio constancia de no acuerdo, el 21 de enero de 2020**
- **Inicio de suspensión de términos según Decreto 564 del 2020: 16 de marzo de 2020. Término fue de 3 meses y 14 días.**
- **El llamante en garantía contaba hasta el 8 de mayo de 2022, para iniciar la acción en contra de mi representada La Equidad Seguros Generales O.C**
- **El presente llamamiento en garantía solo se efectuó hasta el 28 de enero de 2025, es decir 2 años y 8 meses después de configurarse el término prescriptivo.**

Considerando los hitos temporales antes enunciados, es claro que la prescripción ordinaria para ejercer la acción en contra de mi representada feneció con creces, sin que se verificara que el llamante en garantía hubiera interrumpido el término prescriptivo, pues no inició ningún tipo de acción en contra de La Equidad Seguros Generales O.C y por ende ante la inactividad de la parte demandante en los términos que consagra la ley, es claro que en este caso no puede existir obligación indemnizatoria a cargo de la Compañía aseguradora.

En conclusión, probado como se encuentra, desde el 3 de octubre de 2019 (fecha en el llamante en garantía conoció frente a la solicitud de conciliación extrajudicial) hasta la fecha de presentación del llamamiento en garantía, transcurrieron más de 2 años superando con creces el término de prescripción ordinaria. De tal suerte que como la parte demandante no interpuso acción alguna dentro de los términos del artículo 1081 del C.Co, la prescripción operó y por ende no podrá surgir obligación alguna a cargo de La Equidad Seguros Generales O.C.

Por lo anteriormente expuesto ruego a Usted, Señor Juez, declarar probada la excepción propuesta.

2. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.

En primer lugar, téngase en cuenta, que verificado el escrito de llamamiento en garantía se evidencia que, en el mismo, no se encuentra consignada una sola pretensión declaratoria o condenatoria en contra de la Aseguradora que aquí represento, por lo que no hay lugar al reconocimiento de pretensiones que claramente no fueron solicitadas en la oportunidad procesal correspondiente. En ese sentido, es necesario señalar que el principio de congruencia es la regla del derecho procesal, en virtud del cual el Juez se encuentra obligado a que sus decisiones sean concordantes con los hechos y pretensiones que se presentan en los escritos que se elevan ante los Despachos. El artículo 281 del Código General del Proceso, contempla los preceptos que debe seguir el Juez en sus sentencias de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que

este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.

PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.

En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.

En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas”

En virtud de lo anterior, se puede concluir que: i) no es válido emitir fallos ultra petita, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandando por una cantidad superior a la solicitada en el líbello de la demanda, o sentencias que concedan más de lo pedido. ii) Tampoco se pueden emitir fallos extra petita, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandado con base en pretensiones distintas a las deprecadas en la demanda y iii) no pueden ser proferidas sentencias por causas distintas a las invocadas en el petitum de la demanda.

En cuanto a la importancia del principio de congruencia, la Corte Constitucional ha indicado:

“La jurisprudencia de esta Corporación *ha definido el principio de congruencia como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó.* Además ha establecido que siempre que exista falta de congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por tanto, será procedente la tutela contra providencia judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso.

(...)

24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. **Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello**²³.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En este orden de ideas, resulta incuestionable que el juez al momento de fallar no podrá desbordarse de las pretensiones propuestas. Es claro entonces que la sentencia que resuelve la demanda está sometida al principio de congruencia. Así las cosas, se evidencia a través de preceptos legales y jurisprudenciales que el Juez está en la obligación de garantizar el derecho de defensa y debido proceso dentro de las actuaciones judiciales, a las partes intervinientes en el proceso, en el sentido de no proferir sentencia sobre aspectos adiciones a los solicitados por las partes, o que no hayan sido solicitados. Teniendo en cuenta todo lo previamente mencionado, ahora es necesario aterrizar la teoría al caso concreto. Se evidencia en el escrito del llamamiento en garantía no contiene pretensiones precisas y claras formuladas en contra de la compañía de seguros que represento, desconociendo lo estipulado en el artículo 65 del Código General del Proceso que indica que el llamamiento en garantía debe cumplir con los mismos requisitos de la demanda, consignados en el 82 del Código General del Proceso.

Así las cosas, y de la lectura de las pretensiones no se evidencia ninguna en la cual se solicite hacer efectiva las pólizas objeto del llamamiento en garantía, Razón por la cual, el Juez no podrá ordenar el pago de suma alguna en cabeza de La Equidad Seguros Generales O.C. Lo anterior, por cuanto el llamante en el presente asunto, en ningún momento solicitó la afectación de la póliza de seguro que aquí nos ocupa.

En conclusión, se evidencia como en el presente asunto la parte no siguió los lineamientos dispuestos en el artículo 65 y 82 del Código General del Proceso para la presentación del llamamiento en garantía, pues ni siquiera planteó pretensiones en el escrito. Es por ello que, bajo el principio de congruencia, al juez no le es dable en el contenido de la sentencia ordenar la afectación de póliza alguna expedida por mi representada. Razón por la cual, el Juez no podrá pronunciarse o decidir más allá de lo consignado en las pretensiones de la demanda, y de la lectura de ellas, se denota que la parte llamante no solicitó la afectación de la Póliza en mención.

3. FALTA DE COBERTURA MATERIAL ANTE LA CONFIGURACIÓN DE RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS DEL AMPARO DE LA PÓLIZA NO. AA003687

En atención a que el contrato de transacción suscrito entre el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D). y el señor Fredy Muñoz Gómez, no fue autorizado, aceptado y/o consentido por mi procurada. Así, se configura un riesgo expresamente excluido del amparo de la póliza, aparejando ello la falta de cobertura material. Por tal motivo, al estar ante una causal de exclusión de cobertura, deberá el H. Juez denegar las pretensiones de la demanda, pues los hechos materia de litigio no fueron un riesgo previamente trasladado al asegurador.

²³ Sentencia T-455 de 2016, Corte Constitucional. Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO
BSDM

En el entendido de que con base al artículo 1056 del Código de Comercio el asegurador puede a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume, en reciente fallo del 04 de abril de 2022²⁴ la Corte recordó:

“(…) ante la amplitud de los eventos que son susceptibles de ser amparados, la aseguradora puede especificar «los riesgos cuya cobertura se obligan en virtud de la misma» (SC8435, 2 jul. 2014, rad. n.º 2002-00098-01), como lo reconoce el artículo 1056 del Código de Comercio, a saber: «[c]on las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado».

Refiriéndose a este precepto, la Corporación dijo que en la especificación de los riesgos «se reconoce plena autonomía al asegurador, a quien el artículo 1056 ejusdem, norma aplicable a los seguros de daños y de personas, le otorgó la potestad de delimitar espacial, temporal, causal y objetivamente los eventos por cuya ocurrencia se obligaría condicionalmente a indemnizar al beneficiario, pues estatuyó que podía asumir, con las restricciones legales» (SC4527, 23 nov. 2020, rad. n.º 2011- 00361-01).

(…) Estas estipulaciones, conocidas como «cláusulas de exclusión», tienen por finalidad limitar «negativamente el ‘riesgo asegurado’, al dejar por fuera de cobertura algunas situaciones que podrían estar allí comprendidas y que, por ende, de acontecer no son indemnizables. De tal manera que su consagración no conduce a la desaparición o alteración del componente económico previsto en favor de los beneficiarios, sino a la imposibilidad de que las reclamaciones por los hechos al margen de la protección tengan éxito» (SC4574, 21 ab. 2015, rad. n.º 2007-00600-02) (…) (Énfasis de autoría)

Al respecto, resulta oportuno señalar que, a su vez, la Doctrina ha sido pacífica al entender el contrato de seguro como un acto jurídico que proviene de la voluntad de las partes, siendo, por tanto, una expresión del principio de la autonomía de la voluntad privada. De tal suerte, autores como como Castro (2019) han sostenido que:

“(…) Quien celebra un negocio jurídico en virtud de la autonomía privada está creando una nueva relación jurídica, que no existía aún. […] La autonomía privada únicamente tiene sentido desde el derecho, como la posibilidad de crear, modificar o extinguir relaciones y normas jurídicas. […] Se trata de un poder normativo, es decir, una potestad de crear normas jurídicas y la autonomía de la voluntad es la fuente de que ellas se derivan (…)²⁵

Igualmente, como lo explica Ospina Fernández (2005), este postulado se fundamenta en la independencia que otorga el legislador a los particulares para regular sus propias relaciones sociales. En otras palabras, se otorga eficacia jurídica a la iniciativa privada para atribuir los efectos que mejor se enmarquen a su propósito particular²⁶. Así pues, como una manifestación de la autonomía de la voluntad privada, de conformidad con las condiciones particulares y generales del contrato de seguro instrumentado a mediante Póliza de Seguro Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, clausulado número 01062010-1501-P-03-0000000000000103 se establecieron los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo mi representada delimitando la extensión del riesgo asumido por ella. Señalando así expresamente que la póliza no brindaría cobertura cuando se realizaran acuerdos no autorizados y/o consentidos mi procurada, estipulándose al respecto lo siguiente en el título de exclusiones:

²⁴ Sentencia SC487-2022 del 04 de abril de 2022. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

BSDM

²⁵ Castro de Cifuentes, M. (2019). Los contratos normativos y los contratos marco en el derecho privado contemporáneo. *Estudios Socio-Jurídicos*, 21(1), 121-150.

²⁶ Ospina Fernández, G. (2005). *TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO JURÍDICO*. Editorial Temis S.A.

2. EXCLUSIONES

LA EQUIDAD QUEDARÁ EXONERADA DE TODA RESPONSABILIDAD BAJO EL PRESENTE AMPARO CUANDO SE PRESENTE UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

2.20. CUANDO EL TOMADOR, ASEGURADO O CONDUCTOR SE DECLARE RESPONSABLE O EFECTÚE ARREGLOS TRANSACCIONES O CONCILIACIONES SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO PREVIO DE LA EQUIDAD.

De tal suerte, de conformidad con el contrato de transacción válidamente celebrado entre el señor Santiago Betancourt Muñoz (Q.E.P.D.) y el señor Fredy Muñoz Gómez, en calidad de presunto conductor del vehículo de placa SHT-462, sin contar con el consentimiento y/o aquiescencia previa y por escrito de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., es palmaria la configuración de una causal de exclusión de cobertura de la póliza.

Para constancia se suscribe por las partes en dos hojas: una para cada una ante dos testigos hábiles, en la ciudad de Popayán a los 17 días del mes de marzo de 2017.

Santiago Betancourt Muñoz
SANTIAGO BETANCOURT MUÑOZ
C.C. 1.511.071 de Santander de Qui.

Fredy Muñoz Gómez
FREDY MUÑOZ GÓMEZ
C. C. No. 4.627.740 de Bolívar Cauca

Testigos:

Rubio Pantoja Torres
RUBIO PANTOJA TORRES
C. C. 87.027.345 Taminango N

Osvaldo Betancourt Zúñiga
OSVALDO BETANCOURT ZÚNIGA
C. C. 10.535.749 de Popayán

Consecuentemente al ser clara la configuración de la causal de exclusión 2.20, relativa a la suscripción de contrato transaccional sin la autorización y/o aquiescencia de la compañía aseguradora, la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, no podrá operar al interior del presente caso por ausencia de cobertura material de conformidad con lo expresamente pactado por las partes al momento de suscribir la póliza en comento.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

4. FALTA DE COBERTURA MATERIAL DEL CONTRATO DE SEGURO, POR CUANTO LA PÓLIZA DE SEGURO RCC No. AA003687 NO AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

En primer lugar, debe manifestarse que en el ámbito de libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, la compañía aseguradora en virtud de la facultad que se consagra en el artículo 1056 del Código de Comercio puede asumir a su arbitrio todos o algunos riesgos a que está expuesto el interés asegurado. Es de esta forma como la aseguradora decide otorgar determinados amparos y solo se ve obligada al pago de indemnización por los riesgos que efectivamente le fueron transferidos y que se encuentran establecidos en la póliza dentro de sus coberturas. Lo cual desde ya debe ser tenido en cuenta por el Honorable juzgador, como quiera que en este proceso se discute una responsabilidad civil extracontractual, riesgo que no fue amparado por la póliza No. AA003688 referida en el llamamiento en garantía y por el cual no presta cobertura. Razón suficiente para que en este proceso no resulte procedente

condena alguna en contra de mi representada, puesto que en la Póliza de Seguro No. AA003688 no se amparó la responsabilidad civil extracontractual que se discute en el presente litigio.

La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

(...) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”

Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato aseguraticio. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (...).²⁷
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Es en virtud de la facultad establecida en el artículo 1056 del Código de Comercio que se ha desarrollado la teoría de los riesgos nombrados, consistente en que solo se amparan aquellos riesgos determinados en la póliza. Así lo ha reconocido la Superintendencia Financiera de Colombia:

“En la carátula de la póliza, así como en su clausulado, el contrato aseguraticio especifica de manera individualizada los amparos asumidos o lo que es lo mismo, los casos en que se asumirá el riesgo, lo que significa que se trata, de riesgos nombrados, lo que conlleva revisar el texto de la póliza, a efectos de establecer si el siniestro reclamado en la demanda, es materia de amparo. La delegatura concluye que la ocurrencia del siniestro cuya indemnización se reclama, no encuentra amparo en los términos pactados en la póliza materia de la litis.”²⁸

Así las cosas, debe inicialmente estudiarse cuáles fueron los amparos determinados en la Póliza de Seguro No. AA003688 A saber:

1. AMPAROS

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, QUE EN ADELANTE SE LLAMARÁ LA EQUIDAD, CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, INDEMNIZARÁ HASTA LA SUMA ASEGURADA Y POR ACCIÓN DIRECTA DE LA VÍCTIMA O SUS CAUSAHABIENTES, A LOS PASAJEROS DEL VEHÍCULO ASEGURADO QUE SUFRAN LESIONES CORPORALES DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TRANSPORTADOR ASEGURADO DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA, Y A LOS TÉRMINOS, ESTIPULACIONES, EXCEPCIONES Y LIMITACIONES CONTEMPLADAS EN ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO DICHO PASAJERO VIAJE EN EL COMPARTIMIENTO DESTINADO A LOS PASAJEROS O SE ENCUENTRE SUBIENDO O BAJANDO DEL MISMO, Y EL VEHÍCULO ESTÉ CUMPLIENDO CON ITINERARIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD TOMADORA.

Bogotá – Cra 11A No.94A-23 Of. 201
Edificio 94º
+57 3173795688
Car. Olaya Bate #354-101 Cl. 12º
Centro Empresarial Chipichape
+57 315 577 6200 - 602-6594075

²⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de septiembre de 2015, M.P. Ariel Saizar Ramírez, radicado **BSDM** 11001-02-03-000-2015-02084-00.

²⁸ Superintendencia Financiera de Colombia. Sentencia de 11 de marzo de 2016. Radicado No. 2015-089162. Expediente No. 2015-1474

Documento: Condicionado de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Contractual No. AA003688. Es decir, que la responsabilidad de la Aseguradora se limita a lo determinado en la póliza de seguro, motivo por el cual, si allí no está expresamente amparado, no podrá ampliarse el límite de coberturas previamente delimitado por las partes. Puesto que ello implicaría crear obligaciones no pactadas, resquebrajándose así el principio de obligatoriedad de los contratos. Como se observa, en ninguna de las coberturas de la póliza se amparó la Responsabilidad Civil Extracontractual que se reclama en este proceso. De esta manera, debe decirse que todas las pretensiones de este proceso se encuentran encaminadas a reclamar perjuicios derivados de una Responsabilidad Civil Extracontractual, sin que dicho amparo se encuentre cubierto en la póliza de seguro No. AA003688. Por lo tanto, no podrá reconocerse indemnización alguna con cargo a la póliza por este tipo de responsabilidad. Puesto que la responsabilidad extracontractual no hizo parte de los amparos de la póliza suscrita entre las partes y reconocerla iría en contravía del principio según el cual, el contrato es ley para las partes.

En ese sentido, bastará con definir cada uno de los amparos delimitados en la póliza para que quede suficientemente claro que la póliza por la cual fue vinculada mi representada a este proceso no presta cobertura material para la Responsabilidad Civil Extracontractual, esto en virtud a que los pasajeros del vehículo son los únicos y eventuales beneficiarios, y el señor Santiago Betancourt, no lo era. Por tanto, procedo a definir cada amparo de manera individual en los siguientes términos:

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO				
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
Muerte Accidental	smmlv 500.00	.00%		\$.00
Incapacidad Total y Permanente	smmlv 500.00	.00%		\$.00
Incapacidad Total Temporal	smmlv 500.00	.00%		\$.00
Gastos Médicos	smmlv 500.00	.00%		\$.00
Protección Patrimonial		.00%		\$.00
Asistencia Jurídica en Proceso Penal		.00%		\$.00

- **Documento:** Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Contractual No. AA003688

Como se observa incluso en el condicionado de la póliza, donde se encuentra la definición de cada uno de los riesgos, ninguno de los amparos contenidos en ella se encuentra relacionada con la Responsabilidad Civil extracontractual en que pudiera incurrir el asegurado, sino únicamente se circunscribió a los perjuicios que sufrieran los pasajeros del vehículo de placa SHT462.

En conclusión, la responsabilidad extracontractual que se discute en el presente litigio por los perjuicios derivados del accidente de tránsito acaecido el 10 de marzo de 2017, no se encuentra cubierta en la póliza de seguro expedida por mi representada. Dado que la responsabilidad extracontractual no es un riesgo amparado por la Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Contractual No. AA003688, como quiera que los beneficiarios de los amparos contenidos en dicha póliza son los pasajeros u ocupantes del vehículo de placas SHT462. Por el contrario, de la lectura de las coberturas de la póliza, es posible advertir con total claridad y certeza sobre la ausencia de cobertura para los perjuicios derivados de responsabilidad civil extracontractual que se pretende atribuir al extremo pasivo, razón suficiente para que resulte improcedente la afectación de la mencionada póliza en el caso concreto.

Ruego señor Juez declarar probada esta excepción.

5. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. POR CUANTO NO SE HA REALIZADO EL RIESGO ASEGURADO DE LA PÓLIZA AA003687 Y AA003688.

Se propone el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al despacho que en el caso objeto de estudio, no es procedente la afectación de la póliza No. AA003687 ni la AA003688 en cuanto no se ha realizado el riesgo asegurado, es decir ni la responsabilidad civil extracontractual, ni mucho menos la responsabilidad contractual del asegurado. Lo anterior, en tanto que se configuró la causal eximente de responsabilidad “hecho de la víctima” rompiendo así el nexo causal, lo que indica que es inviable señalar que los daños

alegados por la parte demandante ocurrieron como consecuencia de las actuaciones ejecutadas por el conductor del vehículo asegurado.

Es claro que, no se ha realizado el riesgo en concordancia con las condiciones generales y particulares de la póliza en cuestión, que menciona como amparo principal el siguiente:

“Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, que adelante se llamará La Equidad, con sujeción a las condiciones de la presente póliza, indemnizará por la suma asegurada estipulada en la carátula de la póliza o en sus anexos, los perjuicios materiales causados a terceros, derivados de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado de acuerdo a la legislación colombiana, por lesión, muerte o daños a bienes de tercero, ocasionados a través del vehículo amparado, siempre que se le demuestren al asegurado judicialmente como consecuencia de sus acciones u omisiones, de acuerdo con los riesgos asumidos por la Equidad y definidos en esta póliza o en sus anexos.”

Ahora bien, el artículo 1072 del Código de Comercio define como siniestro:

“ARTÍCULO 1072. DEFINICIÓN DE SINIESTRO. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado.” (Subrayado fuera del texto original)

Ahora bien, es fundamental que el Honorable Despacho tome en consideración que en el ámbito de libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, la Compañía Aseguradora en virtud de la facultad que se consagra en el Art. 1056 del C. Co., puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés asegurado. Es de esta forma como se explica que al suscribir el contrato asegurativo respectivo, la aseguradora decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares estipuladas en el mismo. De tal manera que su obligación condicional solo será exigible si se cumplen con los presupuestos que hayan sido pactados por las partes. En otras palabras, las compañías aseguradoras tienen la libertad de escoger cuáles son los riesgos que le son transferidos y en este sentido, solo se ven obligadas al pago de la indemnización en el evento que sean estos riesgos los que acontezcan durante el desarrollo de la relación contractual. La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

*“(…) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el Art. 1056 del C. Co., la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual **se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.**”*

Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato asegurativo. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (...).”²⁹
(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

²⁹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de septiembre de 2017. M.P. Ariel Salazar Ramírez. **BSDM**

De conformidad con la facultad otorgada por el Art. 1056 del C. Co., las entidades aseguradoras pueden asumir a su arbitrio con la salvedad que dispone la ley, los riesgos que le sean puestos a su consideración, pudiendo establecer las condiciones bajo las cuales asumen los mismos. Así las cosas, se evidencia que la cobertura principal de la Póliza es cubrir los perjuicios patrimoniales y causados a terceros por parte del asegurado.

Es importante entonces recordar, que el hecho acaecido y objeto de este litigio tuvo como factor determinante la conducta desplegada por el señor Santiago Betancourt, que como quedará probado cruzó la vía sin observar, tal como quedó establecido en el informe IPAT, lo que definitivamente influyó en la ocurrencia del accidente y constituyó causa efectiva para su acaecimiento.

En conclusión, en el presente caso el riesgo asegurable no se ha originado, puesto que de conformidad con las pruebas obrantes en el litigio que nos atañe, se demuestra que no se reúnen los presupuestos fácticos y jurídicos exigidos para la declaración de responsabilidad en cabeza de los demandados. Lo que quiere decir, que tampoco ha nacido la obligación indemnizatoria en cabeza de la Compañía de Seguros, al no haberse realizado el riesgo contractualmente asegurado. Se reitera que en este caso se rompe el nexo causal que pretende endilgar la parte actora por cuanto medio un hecho exclusivo de la víctima, por lo que no podrían reconocerse los perjuicios alegados por la demandante. En ese orden de ideas, claramente no existe responsabilidad en cabeza de los demandados, lo que por sustracción de materia significa, que tampoco puede hacerse efectiva la póliza de seguro por la que fue convocada mi prohijada. Por todo lo anterior, solicito comedidamente al Despacho declarar probada la presente excepción.

6. SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO, EN LA QUE SE IDENTIFICA LA PÓLIZA, EL CLAUSULADO Y LOS AMPAROS

En el caso en marras deberá el despacho tener en cuenta las condiciones particulares y generales pactadas en la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687 y Póliza RCC No. AA003688, en ese sentido, será necesario que se efectúe un estudio pormenorizado de las mismas, las cuales se anexan al presente escrito a fin de que, de evidenciar que se configure alguna de ellas se falle con total apego a lo pactado por las partes en el contrato de seguro.

Es preciso señalar que de acuerdo con lo contemplado en el Art. 1044 del C. Co., LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., podrá proponer a los beneficiarios, la excepciones que pueda alegar en contra del tomador y el asegurado cuando son personas distintas. Por tanto, en caso de un fallo en contra este deberá ajustarse de acuerdo con las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro y dicha condena no podrá exceder los parámetros acordados por los contratantes.

Por lo tanto, en caso de que prosperen las pretensiones de responsabilidad civil de los demandantes contra mi representada, La Equidad Seguros Generales O. C., en ejercicio de la acción de la víctima en contra de la aseguradora, tal relación deberá estar en concordancia con lo estipulado en el contrato de seguro denominado la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687 Póliza RCC No. AA003688, en la cual se encuentran contenidas las condiciones particulares de la póliza y por las condiciones generales contenidas en la Forma 01062010-1501-P-03-0000000000000103 y forma 03062011-1501-NT-P-08-000000000001005 respectivamente.

7. CARÁCTER INDEMNIZATORIO DEL CONTRATO DE SEGURO

Comoquiera que no se encuentra acreditada la causación de perjuicio alguno en detrimento o afectación de la activa de la acción, no es dable la imposición de obligación indemnizatoria en cabeza de mi procurada, pues la póliza de seguro respecto a la cual se vincula a La EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., cuenta con un carácter meramente indemnizatorio. Lo que deviene en que la misma únicamente podrá afectarse dentro de los límites propios del resarcimiento de los perjuicios efectivamente acreditados.

Nuestro estatuto comercial privilegia y consagra la naturaleza del contrato de seguro como de naturaleza meramente indemnizatoria, determinando al respecto el artículo 1127 del Código de Comercio lo siguiente:

“(...) Art. 1127.-Modificado por la Ley 45 de 1990, artículo 84. Naturaleza del seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. (Subrayado y negrita, fuera del texto original)

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055 (...)” (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

En igual sentido, y originariamente la Corte Suprema de Justicia así lo ha establecido, según el fallo del 22 de julio de 1999, expediente 5065 en el que realizó la siguiente referencia:

“(...) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”³⁰ (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

Ahora bien, en atención a que, de conformidad con el acervo probatorio que milita en el expediente no se acreditó la causación de ninguno de los perjuicios pretendidos los demandantes, pues se observa que: **(i)** Habría un enriquecimiento indebido si se reconociera cualquier suma por lucro cesante, ya que no hay pruebas que demuestren la imposibilidad de percibir ingresos o incluso si los costos del supuesto servicio funerario se tomaran como daño emergente, tampoco se ha probado la merma patrimonial derivada de dicho daño alegado. Todas estas razones evidencian que la solicitud indemnizatoria del demandante va en contra del carácter exclusivamente indemnizatorio del contrato de seguro; **(ii)** No se ha acreditado la materialización de perjuicios morales, y en cualquier caso, es palmario el desconociendo los rubros tasados y adjudicados por la Corte Suprema de Justicia. Esto significa, que si incumplirá el fin último del contrato de seguro que es la reparación, indemnización y/o compensación por los daños y perjuicios devenidos a partir de la configuración de un riesgo asegurado.

Consecuentemente, no es posible la imposición de obligación alguna en cabeza de mi procurada, pues ello devendría en un enriquecimiento sin justa causa que mi prohiljada no se encuentra en la obligación de soportar, pues se observa que implicaría vulnerar el principio indemnizatorio.

Con fundamento en lo expuesto solicito declarar probada la presente excepción de mérito.

8. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE SEGURO RCE SERVICIO PÚBLICO NO. AA003687 Y PÓLIZA RCC NO. AA003688.

Sin perjuicio de lo expuesto en las excepciones precedentes, en gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de obligación de mi representada, se formula esta, en virtud de que contractualmente en la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, utilizada como fundamento

³⁰ Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia del 22 de julio de 1999, expediente 5065 Magistrado Ponente: Nicolás Bechara **ESDM**as

para convocar a mi procurada al presente trámite, se estipularon las condiciones de la responsabilidad del asegurador, sus límites, los amparos otorgados, las exclusiones, las sumas aseguradas, etc. Estipulándose como límite máximo del valor asegurado determinado en la caratula de la póliza.

Ahora bien, es pertinente mencionar que la obligación del asegurador sólo se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del contrato, según su texto literal y por supuesto, la obligación indemnizatoria o de reembolso a su cargo se limita a la suma asegurada, siendo este el tope máximo. Además de que también son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el Código de Comercio, que en su artículo 1079, establece: "...El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada...". Claro está, sin perjuicio del respectivo deducible pactado, es decir, de aquella porción que de cualquier pérdida le corresponda asumir al asegurado.

De acuerdo con los artículos 1079 y 1089 del Código de Comercio, la responsabilidad máxima del asegurador se limita a la suma asegurada, de manera que ese es el tope máximo de la responsabilidad asumida por la aseguradora, siempre y cuando no opere una causal de exclusión convencional o legal, como ocurre en el presente caso.

Ahora bien, es importante señalar que de conformidad con el condicionado aplicable a la Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, el valor señalado en la carátula de la misma es el valor máximo asegurado destinado a indemnizar respecto al amparo de responsabilidad civil extracontractual.

Por consiguiente, en caso de ser condenados, existe un tope de la suma fijada en la carátula de la póliza de conformidad con lo concertado, dependiendo de la cobertura y lo anterior para la indemnización de todos los perjuicios. Así pues, en relación al contrato de seguro instrumentado a partir de la póliza de seguro, es importante señalar que para predicar algún tipo de obligación en virtud de la misma se deberán tener en cuenta los límites máximos de responsabilidad plasmados en ella, los cuales se aprecian en la siguiente imagen tomada de la carátula de la póliza:

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO				
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DED %	DED VALOR	PRIMA
Responsabilidad Civil Extracontractual Servicio Publico		.00%		\$.00
Daños a Bienes de Terceros		10.00%	1.00 smmlv	\$.00
Lesiones o Muerte de una Persona	smmlv 100.00	.00%		\$.00
Lesiones o Muerte de Dos o Mas Personas	smmlv 200.00	.00%		\$.00
Protección Patrimonial		.00%		\$.00
Asistencia jurídica en proceso penal		.00%		\$.00
Lesiones		.00%		\$.00
Homicidio		.00%		\$.00

En el mismo sentido, y habiendo expuesto de forma reiterada frente a la falta de cobertura material de la póliza de responsabilidad civil contractual No. AA003688, en el eventual y remoto caso, que se determinó su cobertura, se deberá tener en cuenta los siguientes topes establecidos en la caratula de la póliza, así:

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO				
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
Muerte Accidental	smmlv 500.00	.00%		\$.00
Incapacidad Total y Permanente	smmlv 500.00	.00%		\$.00
Incapacidad Total Temporal	smmlv 500.00	.00%		\$.00
Gastos Médicos	smmlv 500.00	.00%		\$.00
Protección Patrimonial		.00%		\$.00
Asistencia Jurídica en Proceso Penal		.00%		\$.00

Por lo tanto, en el eventual, hipotético y remoto caso en que se determine la existencia de obligación indemnizatoria en cabeza de mi procurada, en ningún caso podrá superar la suma señalada en la caratula de la póliza siendo este el máximo valor al que mi procurada se obligó de conformidad con las condiciones generales y particulares del contrato de seguro.

Solicito declarar probada esta excepción.

9. DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna. Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

CAPITULO IV

FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA

I. FRENTE A LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE

1. FRENTE A LA “PRUEBA TRASLADADA” Y “OFICIADA SUBSIDIARIAMENTE INSPECCIÓN JUDICIAL PREVIA EXHIBICIÓN”:

Me opongo a la declaratoria de esta prueba comoquiera que, en virtud de lo preceptuado en el artículo 173 del Código General del Proceso, el extremo demandante está en la obligación de incorporar en el plenario, todas las pruebas que pretenda hacer valor dentro del debate procesal, sin que sea posible delegar dicha actividad demostrativa al Juzgado; así lo indica la norma:

“(…) Artículo 173. Oportunidades probatorias

Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

*En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. **El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente (…)**”* Negrilla de autoría.

La norma citada es clara en advertir que, sin lugar a que existan dudas sobre esta carga procesal, es a la parte interesada a quien atañe la obligación de obtener los documentos que pretende hacer valer como prueba. En este caso, los accionantes tenían el deber de conseguir y aportar los elementos de convicción que acreditaran sus aseveraciones al expediente junto con el documento contentivo de la escrito demandatorio; esta, de ninguna manera es una carga que se pueda endilgar o trasladar al Despacho judicial, siendo claro cómo no obra al interior del expediente derecho de petición mediante la cual la parte demandante hubiera pretendido la obtención de las piezas a la Fiscalía General de la Nación y a la Equidad Seguros de Vida O.C. Agencia Popayán.

2. OPOSICIÓN AL DECRETO DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL SOLICITADA

Me opongo al decreto de la prueba solicitada por la parte demandante toda vez que, conforma a lo estipulado en el inciso segundo del artículo 236 del Código General del Proceso *“(…) Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba (…)*”.

Por lo anterior, la inspección judicial resulta ser impertinente e inconducente debido a que la parte demandante cuenta con otros medios de prueba para corroborar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

II. MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C

1. DOCUMENTALES

- 1.1. Contrato de seguro denominado Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, en la que se encuentran contenidas las condiciones particulares de dicha póliza.
- 1.2. Condiciones generales del contrato de seguro denominado Póliza de Seguro RCE Servicio Público No. AA003687, clausulado identificado con el número 01062010-1501-P-03-000000000000103.
- 1.3. Contrato de seguro denominado Póliza de Seguro RC. Contractual No. AA003688, en la que se encuentra contenidas las condiciones particulares de dicha póliza.
- 1.4. Condiciones generales del contrato de seguro denominado Póliza de Seguro RC Contractual Servicio Público No. AA003688, clausulado identificado con el número 03062011-1501-NT-P-08-0000000000001005.
- 1.5. Copia de contrato de transacción y desistimiento.
- 1.6. Copia de solicitud de indemnización radicada por la parte demandante el 12 de septiembre de 2018.
- 1.7. Objeción a la solicitud, emitida por La Equidad Seguros Generales O.C. el 10 de octubre de 2018.

2. INTERROGATORIO DE PARTE

- a. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor JESUS ISAAC BETANCOURT ZUÑIGA para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
- b. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor JUAN MARIA BETANCOURT ZUÑIGA para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
- c. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor OSWALDO BETANCOURT ZUÑIGA para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
- d. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho a la señora GLORIA NEREIDA BETANOCURT ESCOBAR, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
- e. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho a la señora NEISA BETANOCURT ESCOBAR, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
- f. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor ALIRIO BETANCOURT ESCOBAR para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
- g. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho a la señora MARÍA ELVIRA

BETANOCURT ESCOBAR, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.

- h. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor FREDY GERARDO BETANCOURT ESCOBAR para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
- i. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor FREDY NATIVEL MUÑOZ GÓMEZ, en calidad de conductor del vehículo, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
- j. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor RUBIO PANTOJA TORRES, en calidad de propietario del vehículo, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
- k. Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho al señor JESUS ANTONIO MUÑOZ LEBAZA, en calidad de representante legal Cooperativa de Transportadores de Timbio Cootranstimbio., o a quien haga sus veces, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.

3. DECLARACIÓN DE PARTE

Conforme a lo establecido en el Art. 198 del C.G.P., solicito se haga comparecer al representante legal de **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, exclusiones, términos y condiciones de la Póliza de Autos vinculada a este litigio.

4. TESTIMONIOS

Respetuosamente me permito solicitar decretar el testimonio de la doctora **DARLYN MARCELA MUÑOZ**, identificada con la cédula de ciudadanía 1.061.751.492 de Popayán, quien tiene domicilio en la ciudad de Popayán, y puede ser citada en la Carrera 2 Bis No. 4-16, o en la dirección electrónica darlingmarcela1@gmail.com cuyo objeto de prueba del testimonio será declarar sobre la inexistencia de cobertura de la la Póliza de Seguro RCE Servicio Públicos No. AA003687 y la póliza RC. Contractual No. AA003688, los límites pactados, los deducibles concertados, y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial.

5. INTERVENCIÓN EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Adicionalmente con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

III. ANEXOS

1. Los relacionados en el acápite de pruebas.
2. Certificado de existencia y representación legal de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., en el cual figuro como apoderado general de la compañía, el cual ya obra en el expediente por haber sido allegado con el escrito de la contestación a la demanda.
3. Escritura pública No. 2779 del 02 de diciembre de 2021 otorgada ante la notaría décima del círculo de Bogotá D.C. mediante el cual se me otorga poder general por parte de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., el cual ya obra en el expediente por haber sido allegado con el escrito de la contestación a la demanda.

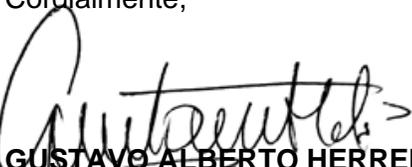
IV. NOTIFICACIONES

La parte actora en la dirección consignada en el escrito demandatorio.

Mi representada LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. en la en la Carrera 9ª No. 99 – 07, P. 12 - 13 - 14 - 15 de la ciudad de Bogotá. Correo electrónico: notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop

Por parte del suscrito en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 Oficina 212 de la ciudad de Cali; correo electrónico notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA.

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá, D.C.

T.P. 39.116 el C.S. de la Judicatura.